

Distr.
RESTRINGIDA
LC/R.1697
6 de febrero de 1998
ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLÉS

C E P A L

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

**Progresos realizados en la privatización de
los servicios públicos relacionados con
el agua: reseña por países de México,
América Central y el Caribe***

* El presente documento ha sido preparado por la División de Medio Ambiente y Desarrollo.
No ha sido sometido a revisión editorial.

ÍNDICE

| | <u>Página</u> |
|---|---------------|
| Resumen..... | 1 |
| Introducción | 3 |
| Nota explicativa | 7 |
| 1. Belice | 8 |
| (a) Abastecimiento de agua potable y saneamiento..... | 8 |
| (b) Electricidad | 8 |
| 2. Costa Rica | 10 |
| (a) Abastecimiento de agua potable y saneamiento..... | 10 |
| (b) Electricidad | 11 |
| 3. Cuba | 13 |
| (a) Abastecimiento de agua potable y saneamiento..... | 13 |
| (b) Electricidad | 14 |
| 4. Dominica | 15 |
| (a) Abastecimiento de agua potable y saneamiento..... | 15 |
| (b) Electricidad | 15 |
| 5. El Salvador..... | 17 |
| (a) Abastecimiento de agua potable y saneamiento..... | 17 |
| (b) Electricidad | 18 |
| (c) Riego y drenaje..... | 20 |
| 6. Guatemala | 21 |
| (a) Abastecimiento de agua potable y saneamiento..... | 21 |
| (b) Electricidad | 22 |

| | |
|---|----|
| 7. Haití | 24 |
| (a) Abastecimiento de agua potable y saneamiento..... | 24 |
| (b) Electricidad | 25 |
| 8. Honduras | 26 |
| (a) Abastecimiento de agua potable y saneamiento..... | 26 |
| (b) Electricidad | 27 |
| 9. Jamaica | 30 |
| (a) Abastecimiento de agua potable y saneamiento..... | 30 |
| (b) Electricidad | 31 |
| 10. México | 32 |
| (a) Abastecimiento de agua potable y saneamiento..... | 33 |
| (b) Electricidad | 35 |
| (c) Riego y drenaje..... | 37 |
| (d) Transporte por vías navegables interiores..... | 38 |
| 11. Nicaragua..... | 39 |
| (a) Abastecimiento de agua potable y saneamiento..... | 39 |
| (b) Electricidad | 40 |
| 12. Panamá | 42 |
| (a) Abastecimiento de agua potable y saneamiento..... | 42 |
| (b) Electricidad | 43 |
| (c) Transporte por vías navegables interiores..... | 45 |
| 13. Puerto Rico | 46 |
| (a) Abastecimiento de agua potable y saneamiento..... | 46 |
| (b) Electricidad | 46 |
| 14. República Dominicana..... | 48 |
| (a) Abastecimiento de agua potable y saneamiento..... | 48 |
| (b) Electricidad | 49 |
| (c) Riego y drenaje..... | 49 |

| | <u>Página</u> |
|---|---------------|
| 15. Trinidad y Tabago | 51 |
| (a) Abastecimiento de agua potable y saneamiento..... | 51 |
| (b) Electricidad | 52 |
| 16. Otros países del Caribe | 53 |
| (a) Abastecimiento de agua potable y saneamiento..... | 53 |
| (b) Electricidad | 53 |

Resumen

En el presente documento - una versión actualizada del informe "Progress in the privatization of water-related public services: a country-by-country review for Mexico, Central America and the Caribbean" (LC/R.1697) de 30 de diciembre de 1996 - se examinan los acontecimientos recientes relativos a la participación del sector privado en la prestación de servicios públicos relacionados con el agua en Belice, Costa Rica, Cuba, Dominica, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, la República Dominicana y Trinidad y Tabago. En la información que se suministra sobre cada país se describe brevemente la situación de la participación privada en los sectores de abastecimiento de agua potable y saneamiento, electricidad, riego y drenaje y transporte por vías navegables interiores; se presentan también datos estadísticos sobre esos sectores.

La participación del sector privado está todavía en sus primeras fases en la mayoría de los países y el sector público sigue administrando la mayor parte de la infraestructura, pero se pueden encontrar algunos ejemplos y hay planes ambiciosos al respecto. Tales ejemplos no abundan en cuanto a los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento se refiere y se limitan en gran parte a Dominica, México, Puerto Rico y Trinidad y Tabago, mientras que en los demás países el sector privado participa sobre todo mediante empresas privadas pequeñas y la subcontratación. Las reformas están mucho más avanzadas en el sector de la energía eléctrica, donde muchos países siguen un proceso evolutivo de reforma, en el que la competencia se introduce gradualmente en la generación de energía.

Introducción

Casi todos los gobiernos de América Latina y el Caribe han anunciado una política de aumento de la participación privada en los servicios públicos relacionados con el agua. La índole concreta de esa política varía mucho de un país a otro en cuanto a su contenido y, aún más, su ejecución. Además, las políticas de aliento de la participación privada empezaron mucho antes en algunos países y, en consecuencia, esos países están más avanzados en su ejecución. Sin embargo, la privatización, incluso en los países donde ha avanzado más, no ha abarcado siempre los servicios públicos relacionados con el agua. Esas diferencias y otros factores, como el rango de las dependencias gubernamentales que se encargan de privatizar los servicios y las variaciones de un sistema de regulación a otro, sugieren la conveniencia de una reseña por países como la que figura en el presente documento.

Variaciones entre las políticas de privatización

Aparte de que la privatización comenzara antes en Chile, las principales diferencias entre los países de la región tienen que ver con el hecho de que los servicios públicos relacionados con el agua se hayan incluido o no en el proceso de privatización, y con el alcance de esa inclusión. Solamente en unos cuantos países se ha traspasado al sector privado la función de administrar los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, si bien otras funciones dentro de esos servicios, de carácter más técnico, efectivamente se han traspasado en muchos países. Incluso la generación y distribución de electricidad, hasta muy poco, se ha privatizado ampliamente sólo en la Argentina, Bolivia, Chile y el Perú. Todavía, en varios países la mayor parte del sector eléctrico permanece en manos del gobierno. Otros países ya han empezado programas extensivos de privatización del sector eléctrico, particularmente en Brasil y Colombia, pero también en varios países de Centroamérica, incluyendo Guatemala y Panamá. Hasta en México, existe una apertura limitado hacia inversión privada en la generación de electricidad. Todavía, en América Latina son únicamente cuatro los países en que las principales atribuciones de gestión de los servicios públicos relacionados con el agua se han transferido al sector privado. Sólo en uno de los cuatro, a saber, en la Argentina, se ha encomendado a empresas privadas la gestión de importantes sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento.

Por ello, al analizar la participación privada en los servicios públicos relacionados con el agua, es importante no exagerar su magnitud. En términos generales, en el conjunto de la región, la participación privada todavía es incipiente y en la mayor parte de los países el sector público administra aún lo esencial de la infraestructura. En consecuencia, la experiencia de la participación privada en la administración es muy limitada. Es limitada tanto en el tiempo como en el espacio y, por ello, quizá las lecciones de la experiencia actual, que en conjunto ha sido muy prometedora, no puedan aplicarse en general a la región. En contraste, se tiene mucha más experiencia con una participación privada más limitada en actividades operacionales mediante contratos de servicios.

Entre los ejemplos al respecto figuran la contratación, frecuentemente de antiguos empleados, para el mantenimiento de las instalaciones y la infraestructura y para actividades de facturación, la utilización de consultores para el diseño y la supervisión de obras de construcción e incluso para administrar los sistemas. Ese tipo de participación privada no representa para la administración pública un reto del mismo tipo que el del traspaso de las responsabilidades administrativas mediante una concesión o una venta directa.

Vender la infraestructura existente a inversionistas privados ha sido la política que han elegido en su mayor parte la Argentina, Chile y el Perú con respecto a la generación de electricidad y parece la solución probable de muchos otros países, entre ellos el Brasil y Colombia. No se ha recurrido a las ventas para traspasar servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, aunque el Gobierno de Chile se propone vender dos terceras partes de las acciones de sus empresas regionales de abastecimiento de agua. En la Argentina se han utilizado arreglos de concesión, pero la Provincia de Mendoza esta considerando la venta de acciones. En Bolivia, el sistema de agua potable de La Paz ha sido transferido por concesión a un consorcio de empresas privadas y el Gobierno del Perú estudia la posibilidad de encomendar a un concesionario la explotación de SEDAPAL, el servicio en Lima. En México, D.F., los contratos de gestión son el medio que se utiliza, aunque en la política del país se contempla la posibilidad de convertirlos en arreglos de concesión en el futuro. Se ha adoptado una política similar en Trinidad y Tobago. Otro ejemplo es la frecuente utilización de contratos de "construcción, explotación y transferencia" (BOT) en México para las instalaciones de tratamiento de aguas servidas.

Varios países han adoptado políticas que permiten la inversión privada en nuevas instalaciones, en particular para generar electricidad. La inversión privada también es cada vez más común en pequeños sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento, en particular en balnearios y nuevos complejos residenciales de altos ingresos.

Políticas regulatorias

La apertura de los servicios públicos relacionados con el agua a la participación privada se ha visto limitada, en parte, porque en la mayor parte de los países falta un marco regulatorio que rija el funcionamiento de las actividades monopolísticas. En la mayoría de los países, dado que esas actividades estaban en manos del gobierno, no se consideró necesario regular la prestación de esos servicios. Esa opinión ha cambiado ya y actualmente se desarrollan sistemas regulatorios, aunque, excepto la Argentina y Chile, pocos países han tenido aún la experiencia de su funcionamiento real.

En la mayoría de los países se tiene la intención de regular cada industria por separado, pero la regulación de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en la Argentina se hace básicamente empresa por empresa, ya que a cada provincia le incumben las competencias de regulación. En algunos países más pequeños, como lo sugieren los ejemplos de Costa Rica y Jamaica, se propone un solo órgano regulador de todos los servicios públicos. No es fácil desarrollar un sistema regulatorio y ha resultado necesario formular sistemas en los que se puedan incorporar fácilmente las lecciones adquiridas con la experiencia, ya que no es posible predecir todos los problemas desde el comienzo. Los principales obstáculos son la falta de experiencia y una curva de aprendizaje relativamente pronunciada en el caso de los encargados de la regulación, una vez comenzada la explotación. Estos factores han sido especialmente importantes en el sector de agua potable y alcantarillado.

La descentralización de las funciones de explotación y el establecimiento de un sistema regulatorio bien estructurado pueden ser instrumentos eficaces para mejorar el funcionamiento de los servicios públicos, incluso en el sector público. En Chile, en los seis años transcurridos desde que se estableció ese sistema, se ha logrado una notable mejora en la eficiencia de la gestión de los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento, y ello sin

ningún traspaso de la propiedad o de las competencias de gestión al sector privado. Una de las claves del éxito de la regulación en Chile ha sido el diseño y la aplicación de un sistema eficaz de tarifas.

Queda claro que el traspaso de las competencias de gestión de los servicios públicos al sector privado no puede tener éxito sin un marco regulatorio adecuado y que funcione bien. No se puede negar que la regulación de los monopolios privados plantea serios retos a las administraciones públicas de la región y en la política regulatoria se debe aprovechar al máximo la competencia, prever la necesidad de renegociar con los proveedores para ajustar el marco regulatorio y las normas a las lecciones de la experiencia y hacer hincapié en la fijación de las tarifas, sin subestimar los problemas que ello puede entrañar. La importancia de esto queda ilustrada tanto por el intento de privatizar los servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en Caracas, que fracasó en gran parte debido a que se carecía de una estructura regulatoria suficientemente bien definida como por la experiencia en Buenos Aires, donde a pesar del éxito general del traspaso de la administración del sistema de abastecimiento de agua y saneamiento a un concesionario privado, todavía hay problemas con respecto a la elaboración de un sistema eficiente de tarifas.

Riego

La evolución de la política relativa a la participación del sector privado en el riego merece analizarse por separado, dadas sus características particulares. Las tendencias de las políticas de riego en la región son sorprendentemente uniformes. Desde 1990, casi todos los países han adoptado políticas para traspasar a los agricultores la responsabilidad de la gestión, explotación y mantenimiento de la infraestructura de riego.

Ello ha entrañado cambios considerables en esferas normativas conexas, como las grandes modificaciones introducidas en la tenencia de las tierras de *ejido* en México. Asimismo, ha conducido al desarrollo de nuevos mercados para suministrar los productos y prestar los servicios requeridos a fin de administrar y explotar los sistemas de riego. Los servicios que antes prestaban los departamentos gubernamentales encargados de la gestión del riego se han abierto ya al sector privado. En el Perú ha llevado a que se proponga una reforma completa de la ley de aguas.

Sin embargo, hasta la fecha no se han vendido o traspasado en ningún país los sistemas de riego en bloque a los inversionistas privados. La infraestructura se ha traspasado en su totalidad a los agricultores o se han cedido instalaciones secundarias, dejando las obras principales de control en manos del sector público. Solamente en Chile controlan los usuarios todo el proceso de gestión en materia hídrica, desde la distribución de las corrientes fluviales hasta el abastecimiento de agua a las explotaciones agropecuarias u otros usuarios finales, lo que exige que los usuarios también inviertan en importantes estructuras de control, pero incluso en Chile el sector público construye aún muchas estructuras de envergadura.

Oportunidades de inversión

La apertura a la participación privada de los servicios públicos relacionados con el agua ha creado muchas y muy distintas oportunidades de inversión. La más interesante quizá sea la posibilidad de hacerse cargo del servicio, ya sea mediante una compra directa o un arreglo de concesión, pero las oportunidades no se paran ahí. Los contratos de gestión también pueden

brindar oportunidades apreciables, en particular a las firmas que se especializan en prestar servicios concretos a gran número de las empresas que participan en el mercado. En muchos países, la disolución de los antiguos monopolios gubernamentales centralizados y su traspaso a empresas explotadoras provinciales, regionales o municipales del sector público han creado un gran mercado para los proveedores privados de servicios a las industrias de electricidad y de abastecimiento de agua y saneamiento.

Según datos del Banco Mundial, las inversiones en infraestructura en América Latina y el Caribe disminuyeron pronunciadamente en el decenio de 1980 con respecto al de 1970, sobre todo en el abastecimiento de agua potable y el saneamiento. Fueron también menores que en la región de Asia y el Pacífico. Se puede prever que la demanda de inversiones aumentará sustancialmente a medida que las economías de la región se recuperen finalmente de la recesión del decenio de 1980 y de los efectos de la devaluación en México en 1992.

Hasta la fecha, la mayor parte del interés mostrado por el sector privado se ha concentrado en las posibilidades que brindan la venta o la concesión de la generación y distribución de electricidad. Esas oportunidades de inversión han atraído a América Latina y el Caribe a muchas empresas de otras regiones. Sin embargo, quizá uno de los fenómenos más interesantes haya sido la expansión hacia el exterior de las empresas de electricidad de Chile. Son ya importantes explotadoras de empresas de distribución y generación de electricidad en la Argentina y el Perú y actualmente empiezan a entrar en los mercados brasileño y colombiano. Al igual que en todos los demás casos, esas empresas suelen formar consorcios con otros inversionistas extranjeros y nacionales. Dos de esas empresas también se han aventurado a explotar servicios de abastecimiento de agua y saneamiento en Chile y han declarado su interés en invertir en otros países.

En cuanto al abastecimiento de agua y el saneamiento, las ofertas de participación privada en sistemas enteros se han limitado a la Argentina y México, D.F. En general, han firmado contratos de esa índole consorcios de empresas nacionales y extranjeras, en su mayor parte encabezados por grandes empresas europeas de abastecimiento de agua y saneamiento. En general, cabe prever que los consorcios seguirán dominando, dado el tamaño de las empresas que probablemente se abran a la participación privada. Sin embargo, en caso de que los sistemas municipales, más pequeños, se abrieran a la participación de las empresas privadas, en varios países podría surgir un enorme mercado para inversionistas más pequeños.

* * *

En el presente informe se resumen las políticas actuales de cada país con respecto a la participación privada en los servicios públicos relacionados con el agua y la experiencia reciente en el proceso de privatización. No se intenta suministrar información acerca de los progresos en la privatización de bienes concretos, ya que se trata de un fenómeno que evoluciona con demasiada rapidez para poder informar al respecto en el presente documento. Se ofrece como vía de conocer en esencia y con rapidez lo que ocurre en esta esfera en América Latina y el Caribe y como referencia para todas las personas interesadas en potenciar la eficacia de la participación privada en los servicios públicos relacionados con el agua, de modo que se puedan prestar eficientemente esos servicios a todos los habitantes de la región.

Nota explicativa

Se ruega a los lectores que quieran complementar el presente informe con nuevos datos o que hayan encontrado errores que informen a la División de Medio Ambiente y Desarrollo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El material en que se basa el presente informe proviene de una gran variedad de fuentes, algunas de ellas no fácilmente accesibles. Se ha intentado preparar el informe utilizando las mejores fuentes disponibles, pero no siempre se ha tenido acceso a información detallada sobre los programas de privatización y el marco regulatorio de los servicios públicos relacionados con el agua. Sin duda, debido al ritmo del cambio de las estructuras institucionales en muchos países, parte de la información ya ha perdido actualidad.

La CEPAL ha compilado los datos estadísticos utilizados en los cuadros sectoriales basándose en publicaciones nacionales, internacionales y de índole profesional, incluidas las de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Departamento de Información Económica y Social y Análisis de Políticas de las Naciones Unidas, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) y la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE). Los datos se basan en fuentes, fechas y definiciones que difieren entre sí y, por ello, las comparaciones pueden conducir a error.

1. Belice

El Gobierno de Belice aplica una activa política de privatización, como resultado de la cual se han privatizado varias empresas estatales, incluida desde 1993, una parte de la empresa de electricidad. En virtud de la Ley de Electricidad de 1992 se reestructuró la industria eléctrica y se introdujeron en el sector la participación privada y la competitividad.

a) Abastecimiento de agua potable y saneamiento

La participación del sector privado en la prestación de servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento es reducida y no se dispone de información acerca de si se prevé ampliarla. Unos cuantos organismos privados de parcelación de terrenos y urbanización pagan por la instalación de servicios cuyo costo se repercute a los compradores.

Cobertura estimada

El 83% de la población, o sea, el 100% en las zonas urbanas y el 69% en las rurales, tiene acceso a un abastecimiento suficiente de agua apta para el consumo. El 39% de la población, o sea, el 59% en las zonas urbanas y el 22% en las zonas rurales, tiene servicios de saneamiento adecuados. En la ciudad de Belice, según se calcula, se pierde de un 45% a un 67% del agua.

La estrategia gubernamental en el sector del abastecimiento de agua potable y el saneamiento consiste en el fortalecimiento institucional mediante la promulgación de la pertinente legislación, la descentralización de la prestación de servicios en las zonas rurales, y la sostenibilidad mediante la aplicación de un sistema apropiado de recuperación de los gastos.

b) Electricidad

El sector de la energía eléctrica de Belice se reformó en virtud de la "Ley de Electricidad" de 1992, por la que: (i) se traspasaron los activos y pasivos del antiguo *Belize Electricity Board* (BEB), un organismo gubernamental, a la empresa sucesora, la *Belize Electricity Limited* (BEL), empresa privada que se constituyó legalmente como sociedad el 5 de octubre de 1992, en virtud de la Ley de Empresas de Belice (el traspaso se efectuó el 7 de enero de 1993); (ii) se estipuló la regulación de los servicios de electricidad; (iii) se estableció un mecanismo para conceder licencias por las que se autorizara a cualquier persona o empresa a generar, transmitir y distribuir electricidad en una determinada "zona autorizada"; y (iv) se definieron los deberes y las obligaciones de los titulares de las licencias.

Estadísticas del sector

Capacidad instalada neta en 1995 (en MW):

| | |
|----------------|----|
| · térmica..... | 25 |
| · TOTAL | 25 |

| | |
|---|----|
| Porcentaje de la población con acceso a la electricidad | 92 |
|---|----|

El Ministerio de Energía y Comunicaciones, con la ayuda del Director General de Suministro Eléctrico, se encarga de todos los asuntos relativos al sector de la energía eléctrica, incluida su regulación.

La BEL es el único generador, transmisor y distribuidor comercial de electricidad en el país, si bien algunas empresas tienen sus propias instalaciones para generar energía eléctrica. Cierta capacidad de generación está en manos privadas, incluidas dos centrales hidroeléctricas pequeñas, de 150 KW y 60 KW. La BEL tiene una licencia de 15 años para generar, transmitir y distribuir electricidad en todas las zonas donde operaba la BEB. El Gobierno privatizó parcialmente la BEL en marzo de 1993 y conservó el 51% de sus acciones, mientras que el sector privado y la Junta de Seguridad Social, que es de propiedad estatal, son propietarias de las demás acciones. El Gobierno ha indicado que tratará las acciones como inversionista y no como administrador. Actualmente estudia la posibilidad de traspasar las acciones restantes al sector privado.

La *Belize Electricity Company Limited* (BECOL), que pertenece en un 95% a dos empresas de los Estados Unidos de América -la *Dominion Energy de Richmond* (Virginia) y la *International Energy de Denver* (Colorado) (la Junta de Seguridad Social de Belice es propietaria del 5% restante de las acciones)-, ejecuta el proyecto hidroeléctrico de Mollejón, en virtud de un arreglo de BOT. La BECOL venderá electricidad a la BEL sobre la base de un acuerdo de compra de energía eléctrica. Cuando expire la validez del acuerdo, la propiedad de la planta hidroeléctrica se traspasará al Gobierno o a las partes que éste designe. Se trata de una central hidroeléctrica de pasada de 25 MW en el río Macal a su paso por Mollejón.

2. Costa Rica

El Gobierno de Costa Rica inició reformas limitadas del sector público en el decenio de 1980. Actualmente estudia la posibilidad de descentralizar los servicios públicos y eliminar varios monopolios estatales. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), que es la empresa nacional de abastecimiento de agua, contrata actualmente algunas operaciones con proveedores privados. El Gobierno -al menos por el momento- ha decidido no vender el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la empresa eléctrica nacional, pero el sector energético se abre actualmente a la participación privada.

La administración gubernamental de la privatización está a cargo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN).

Hasta el pasado reciente, el Servicio Nacional de Electricidad (SNE) ha sido el órgano regulador de los servicios públicos. Por la Ley N° 7593, el SNE fue transformado en una institución autónoma, denominada la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). Corresponde a la ARESEP fijar precios y tarifas, velar por el cumplimiento de las normas de prestación, realizar inspecciones técnicas, y regular y fiscalizar a los prestatarios de servicios públicos. Para ser prestatario de cualquiera de estos servicios las instituciones y empresas, con la excepción de los que, por mandato legal, ya los prestan, deben obtener la respectiva concesión o el permiso del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE).

a) Abastecimiento de agua potable y saneamiento

El AyA, organismo público autónomo, se encarga de todos los asuntos relacionados con el abastecimiento de agua potable y el alcantarillado, incluida la dirección y formulación de políticas, el establecimiento y la aplicación de normas, la planificación, la financiación y el desarrollo. Opera el 50% de los servicios de agua potable existentes en el país y el 20% de los servicios de alcantarillado, que se prestan a través de 153 sistemas de agua potable, 8 sistemas de alcantarillado, una planta de tratamiento para aguas residuales y 6 lagunas de estabilización.

Covertura estimada

En Costa Rica, toda la población, tanto urbana como rural, tiene acceso al abastecimiento de agua potable, aunque no se trata siempre de agua clorada. Virtualmente la totalidad de la población urbana tiene acceso a los servicios de saneamiento, aproximadamente un 30% con alcantarillado, incluido un 70% en la capital, San José. Hay solamente ocho plantas de tratamiento de las aguas servidas, la mayoría pequeñas y algunas deficientemente operadas, que, según se estima, tratan aproximadamente 10% del total de aguas recolectadas mediante redes de alcantarillado. Se estudia la posibilidad de ampliar los sistemas de alcantarillado y tratamiento de las aguas servidas en varias zonas prioritarias, incluida la zona metropolitana de San José.

Las municipalidades administran los sistemas de agua potable en 40 ciudades y muchas comunidades rurales. Unos 1.200 Comités Administradores de Acueductos Rurales (CAAR) se encargan de la operación y administración de los sistemas de agua potable en las comunidades rurales. El Ministerio de Salud atiende a la población rural con tanques sépticos y letrinas y a la población rural dispersa en lo que respecta al suministro de agua.

Como parte de la reorganización del AyA, algunos de sus antiguos empleados se han convertido en contratistas privados que prestan servicios de los que anteriormente se encargaba el propio AyA. Ese enfoque se basa en la "Ley de Asociaciones Anónimas Laborales" N° 7407 de 12 de mayo de 1994, en virtud de la cual los empleados pueden formar una Sociedad Anónima Laboral (SAL) para prestar servicios por contrato. Las primeras SAL empezaron a funcionar a fines de 1995. En la actualidad se estudia la posibilidad de contratar otras actividades mediante esa modalidad. En 1997, el AyA sometió ante la Contraloría General de la República una lista de 67 de sus funciones, incluidas las de instalación de nuevos servicios, revisiones domiciliarias, mantenimiento de equipo e instalaciones, inspección, diseño y construcción de obras civiles, control de calidad de servicios, cortes y reconexiones de cañerías y diseño de acueductos, para que esta entidad resuelva cuáles servicios pueden privatizarse por medio de SAL.

El consorcio formado por las empresas Aguas de Valencia y Unión Fenosa ACEX de España ha sido adjudicado con los contratos para los servicios de consultoría y la implantación de sistemas de gestión, incluyendo un sistema comercial integrado y un sistema integral financiero y de suministros, en el AyA.

b) Electricidad

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), empresa autónoma de propiedad estatal y verticalmente integrada, en el sector de la energía eléctrica, realiza todas las actividades relacionadas con ese sector, incluidas las de investigación, generación, transmisión y distribución. El ICE también se encarga de los servicios de telecomunicaciones. Otras empresas de servicio público en el mismo sector

prestan sobre todo servicios de distribución y compran energía eléctrica del ICE, aunque algunas pueden generar energía eléctrica en medida reducida. En la zona metropolitana de San José y en algunos pueblos cercanos, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), empresa de servicio público que antes era de propiedad privada, creada en virtud de la Ley N° 2, de 8 de abril de 1941, y que el ICE adquirió en 1968, funciona como filial del ICE. Hay también dos pequeñas empresas de propiedad municipal que generan y distribuyen energía eléctrica y cuatro cooperativas rurales de electrificación. Algunos grandes consumidores compran energía eléctrica directamente del ICE y la CNFL. Hay también una considerable autogeneración de energía eléctrica.

El Gobierno empezó a abrir el sector de la energía eléctrica a la participación del sector privado a fines del decenio de 1980, estableciendo en 1989 la Comisión para la Generación Independiente de Electricidad (COGIP) como un organismo asesor en el área de oportunidades para la generación privada de electricidad y permitiendo la participación privada en virtud de la Ley N° 7200 "Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela" del 28 de setiembre de 1990 y la Ley N° 7508 "Reformas de la Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela" del 9 de mayo de 1995. En virtud de estas leyes se permite a los inversionistas privados y las cooperativas rurales de electrificación construir centrales

Estadísticas del sector

Capacidad instalada neta en 1995 (en MW):

| | |
|-----------------------|-------|
| · térmica..... | 290 |
| · hidroeléctrica..... | 815 |
| · geotérmica..... | 60 |
| · TOTAL | 1 165 |

| | |
|--|----|
| Porcentaje de la población con instalaciones en su vivienda en 1989..... | 90 |
|--|----|

hidroeléctricas y otras en que se utilicen fuentes de energía no convencionales - esto se denomina la "generación autónoma o paralela" - con una capacidad máxima de 20 MW, sobre la base de concesiones otorgadas por 20 años como máximo. Para obtener la concesión se requiere una declaratoria de elegibilidad otorgada por el ICE y una certificación sobre la aprobación de un estudio de impacto ambiental. El ICE puede declarar elegible un proyecto siempre y cuando la potencia, por concepto de generación paralela, no llegue a constituir más del 15% del total de la capacidad nacional instalada. Se autoriza al ICE a comprar electricidad de los proyectos en los cuales por lo menos el 35% del capital social pertenezca a costarricenses. El ICE puede además comprar energía eléctrica proveniente de centrales eléctricas de propiedad privada hasta por un 15% adicional al límite del 15% en bloques de no más de 50 MW de potencia máxima. Las compras deberán efectuarse mediante el procedimiento de licitación pública, con competencia de precios de venta y evaluación de la capacidad técnica, económica y financiera, tanto del oferente como de las características de la fuente de energía ofrecida.

Esas reformas han suscitado considerable interés entre las empresas privadas y actualmente varios productores independientes de energía eléctrica suministran electricidad en virtud de acuerdos de compra firmados con el ICE. Los productores han formado la Asociación Costarricense de Productores Privados de Energía (ACOPE). Como resultado de estas reformas, se ha autorizado el funcionamiento de unos 200 MW, con contratos firmados con el ICE. Se estudia la posibilidad de realizar otras reformas.

En virtud de la Ley N° 5961 de 1976, al ICE le compete desarrollar y explorar fuentes geotérmicas y explotar instalaciones conexas. Después de completar las primeras dos fases de desarrollo geotérmico del campo de Miravalles, el ICE está terminando el proceso de licitación de la tercera fase, que prevé la construcción de dos centrales de 27,5 MW, en virtud de un arreglo de BOT. El contrato de explotación tendría una duración de 15 años.

3. Cuba

El Gobierno de Cuba ejecuta un programa de reformas económicas destinado a introducir incentivos de mercado y aumentar la inversión extranjera, sobre todo en los sectores del turismo, la minería y otras industrias generadoras de divisas y de sustitución de importaciones. Aunque, hasta la fecha, esas reformas han sido más bien módicas y la prestación de servicios públicos relacionados con el agua sigue siendo enteramente estatal, no puede excluirse por completo la participación de capital extranjero, a condición de que resulte viable en el marco de las condiciones de la economía de Cuba.

a) Abastecimiento de agua potable y saneamiento

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) y el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) comparten las competencias en materia de abastecimiento de agua potable y el saneamiento. El primero se encarga de dirigir, ejecutar y vigilar la política estatal en relación con todo lo relativo a los recursos hídricos. Actúa por conducto de la Dirección Nacional de Acueducto y Alcantarillado. Incumbe al MINSAP la calidad del agua potable. El INRH y el Ministerio de Finanzas y Precios proponen las tarifas por el consumo de agua.

La Dirección Nacional de Acueducto y Alcantarillado actúa por conducto de Direcciones Provinciales de Acueducto y Alcantarillado en cada una de las 14 provincias y de Direcciones Municipales de Acueducto y Alcantarillado en cada una de los 169 municipios del país. La prestación de servicios depende financieramente del presupuesto estatal; los recursos se canalizan por conducto de las dependencias de presupuesto de las direcciones provinciales de acueducto y alcantarillado, que controlan los gastos de sus direcciones municipales.

Se adoptan medidas para modernizar la prestación de servicios. Como parte de la reorganización del sector, se mejorarán los mecanismos de financiación y se establecerán procedimientos técnicos y administrativos que aseguren una mayor eficiencia en la utilización y explotación de las redes de abastecimiento de agua potable y saneamiento. Se anunció la introducción de un nuevo sistema de tarifas para los usuarios residenciales a partir de octubre de 1994. No se ha excluido la posibilidad de que el capital extranjero participe en los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento.

Cobertura estimada

En Cuba, el 64% de la población urbana tiene servicios adecuados de abastecimiento de agua potable, incluido un 51% con instalaciones en su hogar. En las zonas rurales, el 73% de la población tiene servicios adecuados, incluido un 27% con instalaciones en su hogar. Dos terceras partes de la población urbana tienen servicios de saneamiento adecuados, el 35% con instalaciones de alcantarillado, mientras que en las zonas rurales el 52% de la población tiene servicios adecuados, incluido un 5% con instalaciones de alcantarillado. Se trata aproximadamente el 22% de las aguas servidas de origen urbano. Sin embargo, recientemente, como resultado de la difícil situación económica del país, la calidad de los servicios ha disminuido progresivamente, incluida una reducción en la continuidad de los servicios y en los índices de potabilidad del agua. Se estima que entre un 30% y un 40% del agua no se contabiliza.

b) Electricidad

La Unión Eléctrica Nacional (UNE), que depende del Ministerio de la Industria Básica (MINBAS) y es un monopolio de propiedad estatal verticalmente integrado, se encarga de la explotación del sistema eléctrico en Cuba. Sin embargo, la explotación de algunas de las principales centrales de energía eléctrica está a cargo de empresas industriales, en particular del

sector azucarero. La energía excedente se transfiere a la UNE. Hay también algunos pequeños sistemas descentralizados que no están conectados con la red.

Estadísticas del sector

Capacidad instalada neta en 1995 (en MW):

| | |
|-----------------------|-------|
| · térmica..... | 3 939 |
| · hidroeléctrica..... | 49 |
| · TOTAL | 3 988 |

| | |
|--|------|
| Porcentaje de la población con instalaciones en su hogar en 1989 | s.i. |
|--|------|

El MINBAS está trabajando sobre un plan para modernizar el sector eléctrico y mejorar su eficiencia, posiblemente con la participación de empresas privadas extranjeras. En octubre de 1997, el Gobierno concedió un contrato de mantenimiento y operación a la empresa canadiense *FirstKey Project Technologies Inc.* para modernizar y expandir la planta termoeléctrica de Santa Cruz del Norte. El proyecto incluye el establecimiento de una empresa mixta para vender electricidad. Anteriormente la empresa francesa *Babcock Enterprises* firmó un contrato para modernizar una planta termoeléctrica. Otras empresas extranjeras estarían negociando contratos similares.

4. Dominica

El Gobierno de Dominica privatizó los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado en el decenio de 1980 y ha privatizado parcialmente el sector de la energía eléctrica.

a) Abastecimiento de agua potable y saneamiento

En el decenio de 1980, el Gobierno, debido a su enorme déficit financiero, se vio obligado a absorber la *Dominica Central Water Authority* (CWA), empresa semiautónoma. El Gobierno, al no poder asumir las funciones de administración del sector de abastecimiento de agua potable y saneamiento, pidió ayuda al Canadá.

El Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) prestó asistencia para establecer una nueva empresa privada, la *Dominica Water and Sewerage Company Limited* (DOWASCO). La DOWASCO desarrolla sus actividades en virtud de la "Ley de Agua y Alcantarillado" de 1989, en que se le concedió licencia exclusiva para desarrollar y controlar las instalaciones de abastecimiento de agua y alcantarillado en Dominica. En virtud de la ley, la DOWASCO se encarga de mantener y desarrollar el sistema de abastecimiento de agua y proporcionar un suministro suficiente y fiable de agua apta para el consumo, así como de conservarla.

Cobertura estimada

En Dominica, el 100% de la población urbana tiene acceso al abastecimiento de agua potable, la mitad mediante instalaciones en su hogar; y el 78% de la población rural también, el 18% de ella mediante instalaciones en su hogar. Solamente una parte reducida de Roseau y Canefield, las principales ciudades, cuenta con alcantarillado. La mayor parte de la población utiliza fosas sépticas y letrinas. Gran parte del agua del alcantarillado no recibe ningún tratamiento, pero se estudia la posibilidad de ejecutar en Roseau un proyecto de alcantarillado que abarcaría una planta de tratamiento.

b) Electricidad

La secretaria de estado responsable del sector energético es el Ministry of Communications, Works and Housing (MCWH). La Ley de Abastecimiento Eléctrico de 1976 dispone que la Dominica Electricity Services Limited (DOMLEC), antigua empresa de propiedad estatal constituida en sociedad en virtud de la Ordenanza sobre las Empresas en 1975, tiene una licencia única y exclusiva de 25 años para generar, transmitir y vender electricidad en la isla. La DOMLEC fue privatizada en marzo de 1997.

Estadísticas del sector

Capacidad instalada neta en 1995 (en MW):

| | |
|-----------------------|---|
| · térmica..... | 5 |
| · hidroeléctrica..... | 3 |
| · TOTAL | 8 |

| | |
|---|----|
| Porcentaje de la población con acceso a la electricidad | 93 |
|---|----|

Desde el decenio de 1980, se han realizado estudios de prefactibilidad para generar electricidad a partir de recursos geotérmicos, con participación del sector privado. En 1995 se anunció un proyecto de energía geotérmica, con la participación de la empresa estadounidense *Caribbean Powers* y una inversión de casi 10 millones de dólares en la construcción de una central geotérmica en el área de la Soufrière. Dificultades en la negociación del contrato han - hasta hoy - obstaculizado el desarrollo del proyecto.

5. El Salvador

El Gobierno de El Salvador ejecuta un programa de reformas económicas destinado a modernizar el sector público, fomentar el crecimiento encabezado por el sector privado y mejorar la eficiencia de los servicios sociales. Como parte de la reforma, se propone alentar la participación privada en los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, así como en el recientemente reformado sector de la energía eléctrica. La privatización del sector eléctrico está más avanzada que la del abastecimiento de agua potable y alcantarillado.

a) Abastecimiento de agua potable y saneamiento

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), empresa autónoma del estado adscrita al Ministerio de Obras Públicas, se encarga de los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado. Tiene la competencia de regular, normar, planificar y prestar los servicios de agua potable y alcantarillado. Presta servicios a aproximadamente el 40% de la población, sobre todo en las zonas urbanas. La

ANDA explota y mantiene sistemas de abastecimiento de agua potable en 177 de los 262 municipios que existen en el país y además explota 80 sistemas de alcantarillado. De los 85 municipios restantes, 72 administran y explotan sus propios sistemas. Además, suministra los servicios a 316 comunidades rurales; alrededor de 120 comunidades rurales operan sus sistemas en forma independiente de la ANDA.

Cobertura estimada

En el Salvador, del 88% de la población urbana que tiene agua potable, el 80% la disfruta dentro de la vivienda, pero solamente el 18% de la población rural dispone de ella, el 16% dentro de la vivienda. El 81% de la población urbana tiene instalaciones de saneamiento, el 57% con alcantarillado, pero solamente el 49% de la población rural tiene instalaciones de saneamiento. La calidad del servicio es irregular.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social desempeña un papel importante en los programas para las zonas rurales. El Fondo de Inversión Social (FIS) y la Secretaría de Reconstrucción Nacional prestan asistencia financiera a pequeños proyectos en las zonas rurales y las zonas urbanas marginales, así como a zonas afectadas por la guerra civil.

El Gobierno, en virtud del decreto ejecutivo N° 62, de 9 de agosto de 1995, estableció la Comisión Coordinadora para la Reforma Sectorial de los Recursos Hídricos (COSERHI), un organismo encargado de impulsar la reforma legal, regulatoria e institucional del sector hídrico. Las reformas están destinadas a: (i) separar las funciones institucionales en el sector mediante la creación de una estructura regulatoria separada e independiente de la operación y provisión de servicios de agua potable y alcantarillado; (ii) establecer organismos especializados que se encarguen, en el sector, de la administración, la regulación, la financiación y la asistencia técnica; (iii) fomentar la participación privada y comunitaria en la provisión de servicios; (iv) establecer un grupo de empresas de explotación; y (v) descentralizar la prestación de servicios.

La participación del sector privado aún es incipiente. Se limita a la instalación de infraestructura en nuevas colonias urbanas de viviendas. El Gobierno desea alentar la

participación privada en la ANDA y ha ajustado las tarifas a fin de recaudar fondos para el programa de modernización. La ANDA subcontrata algunas operaciones (por ejemplo, las relativas a las nuevas instalaciones, la detección de fugas de agua y las reparaciones, etc.) a cooperativas de antiguos empleados y pequeñas empresas privadas).

b) Electricidad

La Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), empresa pública de propiedad estatal verticalmente integrada, que se estableció en virtud del Decreto Legislativo N° 137, de 27 de septiembre de 1948, se encarga de la generación y transmisión de electricidad a nivel nacional, así como de la distribución en las zonas rurales y en algunas ciudades. En mayo de 1994, la

CEL firmó el primer contrato con un productor independiente de energía eléctrica. Hasta hace unos años, la distribución y comercialización de electricidad en la capital y en otras ciudades estaba en manos del sector privado mediante concesiones otorgadas a seis empresas de distribución. En 1986, cuando expiraron las concesiones de cuatro de ellas, de una duración de 50 años, el Gobierno adquirió esas empresas y actualmente las administra la CEL.

Estadísticas del sector

Capacidad instalada neta en 1995 (en MW):

| | |
|-----------------------|-----|
| · térmica..... | 241 |
| · hidroeléctrica..... | 405 |
| · geotérmica..... | 105 |
| · TOTAL | 751 |

| | |
|--|----|
| Porcentaje de la población con instalaciones en su vivienda en 1989..... | 48 |
|--|----|

El sector de la energía eléctrica de El Salvador se reformó en virtud de la "Ley General de Electricidad" (Decreto 843) del 10 de octubre de 1996 y la "Ley de Creación de la Superintendencia General de Electricidad y de Telecomunicaciones" (Decreto 808) del 12 de septiembre de 1996. Las reformas están destinadas a separar las funciones institucionales en el sector; desarrollar un mercado competitivo en las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica; establecer el régimen de libre acceso de las entidades generadoras a las instalaciones de transmisión y distribución; y asegurar el uso racional y eficiente de los recursos, así como la adecuada protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector. Adicionalmente, en la ley se prevé que dentro del plazo de tres años, la CEL deberá reestructurarse a efecto que las actividades de mantenimiento del sistema de transmisión y operación del sistema de potencia sean realizadas por entidades independientes, y que las de generación se realicen por mayor número posible de operadores.

La nueva Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), una institución de derecho público y sin fines de lucro, con autónoma administrativa y financiera, se encarga del cumplimiento de todas las disposiciones legales aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones. La ley faculta a la SIGET para regular y aprobar los cargos por el uso de las redes de transmisión y distribución, por la operación coordinada del sistema de transmisión, y la operación del mercado mayorista y las ventas al usuario final. Los precios por los demás servicios de energía eléctrica son fijados por mutuo acuerdo entre las partes contratantes. Además, los consumidores pueden negociar con cualquier comercializador los precios y condiciones del suministro de energía eléctrica distintos a los aprobados por la SIGET.

La Unidad de Transacciones (UT) se encarga de operar el sistema de transmisión y el mercado mayorista de energía eléctrica; se le prohíbe efectuar por sí operaciones de compraventa de energía eléctrica. El mercado mayorista está compuesto por el Mercado de Contratos y el Mercado Regulador del Sistema (para entrega inmediata). La UT se organiza y opera como sociedad de capital y todo sistema interconectado debe contar con una. Pueden ser sus accionistas los operadores y usuarios finales directamente conectados al sistema de transmisión controlado por dicha unidad. Como medida de transición, la ley establece que mientras la CEL sea propietaria de la red de transmisión y más de un 50% de la capacidad instalada de generación, la UT se regirá por un reglamento interno transitorio que garantice la existencia de mecanismos transparentes y equitativos para la toma de decisiones relacionadas con la operación del sistema y el despacho será realizado por el Centro de Operaciones del Sistema de la CEL.

Los servicios de la generación de electricidad a partir de recursos hidráulicas y geotérmicos se prestan mediante concesiones otorgadas por la SIGET. Las concesiones son permanentes y transferibles. Para obtener una concesión, el interesado debe presentar solicitud a la SIGET, acompañada del estudio de factibilidad del proyecto y el estudio de impacto ambiental, previamente aprobado por las autoridades competentes en la materia. Las concesiones se otorgan previo el establecimiento de competencia por medio de licitación. Las demás actividades de generación, así como las de transmisión, distribución y comercialización requieren de una inscripción en el Registro de Operadores del Sector Electricidad que lleva la SIGET.

Una misma entidad puede desarrollar actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización, pero para hacerlo se requiere establecer sistemas de contabilidad separados para cada una de ellas y registrarlos en la SIGET. Además, las entidades que desarrollen actividades de generación, distribución y comercialización no pueden ser accionistas de la entidad que resulte de la reestructuración de la CEL, que se encargue de operaciones de transmisión, y ni esta, ni sus accionistas, podrán participar en las sociedades que desarrollen las mencionadas actividades.

Actualmente se lleva a cabo el proceso de privatización de las cuatro empresas distribuidoras de electricidad administradas por la CEL, medida aprobada por el parlamento en abril de 1997. La primera fase entrañó la venta en 1997 de un 16% de las acciones de las cuatro empresas a los "inversionistas prioritarios", más de 3.000 empleados y funcionarios de la CEL y las distribuidoras. En la segunda, el 75% de las acciones fueron vendidas el 20 de enero de 1998 en una subasta pública por unos 586 millones de dólares a tres consorcios internacionales. La Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador (CAESS) y la Empresa Eléctrica de Oriente (EEO) fueron adquiridas por ENERSAL de Centroamérica, una filial de la empresa venezolana Electricidad de Caracas, por 297 millones de dólares. La Distribuidora de Electricidad (Del Sur) la compró Electricidad de Centroamérica, una filial salvadoreña de la compañía chilena EMEL S.A., por 180 millones de dólares. La Compañía de Luz Eléctrica de Santa Ana (CLESA) fue comprada por AES El Salvador Ltd. (Islas Caimán), filial de AES Corporation de Virginia, Estados Unidos, por 109 millones de dólares. En la tercera fase que se realizaría en marzo de 1998 el resto de las acciones será vendido al público en el mercado bursátil. Del total de ingresos generados por la venta, unos 160 millones de dólares se

invertirían en proyectos energéticos, 106 millones se utilizarían para crear un fondo de inversiones y 320 millones para el pago de deudas.

c) Riego y drenaje

El objetivo de la política agrícola del Gobierno en la esfera del riego es mejorar la eficiencia del funcionamiento y mantenimiento de los distritos de riego existentes, mediante el traspaso a los usuarios y la recuperación de todos los gastos de explotación y mantenimiento. Se establecerían asociaciones de usuarios, que tendrían su propio estatuto jurídico e institucional, que planificarían el funcionamiento, el mantenimiento y la conservación de las obras de riego y cobrarían todas las tarifas aplicables.

Estadísticas del sector

Superficie agrícola en 1995 (en 1 000 hectáreas):

| | |
|-----------------------------|-----|
| · tierras cultivables | 544 |
| · tierras de regadío | 120 |

6. Guatemala

En Guatemala, la prestación de servicios públicos aún está en gran parte en manos del sector público. Sin embargo, el Gobierno se propone potenciar el papel del sector privado y existen planes de privatizar el sector de la energía eléctrica.

a) Abastecimiento de agua potable y saneamiento

Los municipios se encargan directamente de administrar, explotar y mantener los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento. La municipalidad de la Ciudad de Guatemala explota la Empresa Municipal de Agua de la Ciudad de Guatemala (EMPAGUA), que es la mayor de su índole. La Unidad Ejecutora del Acueducto Nacional Xayá-Pixcayá del Ministerio de Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas (MCTOP) administra, explota y mantiene el Acueducto Nacional Xayá-Pixcayá, que suministra agua -aproximadamente 1 metro cúbico por segundo- a la capital.

Cobertura estimada

Se estima que el 70% de la población tiene acceso al agua potable, el 55% en las zonas rurales y el 90% en la zona metropolitana, así como el 100% en las ciudades de provincias. El 70% de la población tiene servicios adecuados de saneamiento, el 61% en las zonas rurales, el 70% en la zona metropolitana y el 100% en las ciudades de provincias. Las pérdidas de agua en el tendido de la Ciudad de Guatemala se estiman en más de un 40%. Hay pocas plantas de tratamiento de las aguas servidas y, en general, no están bien administradas.

El Comité Permanente de Coordinación de Agua y Saneamiento (COPECAS), creado en octubre de 1985 por Acuerdo Gubernativo N° 1036-85, coordina las actividades de los diferentes organismos públicos que actúan en el sector. El Instituto de Fomento Municipal (INFOM), establecido por decreto N° 1132, de febrero de 1957, presta asistencia a las municipalidades.

El abastecimiento de agua potable y el saneamiento en las zonas rurales están a cargo de dos dependencias del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS): la División de Saneamiento del Medio (DSM) y la Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales (UNEPAR). En el plano local, los comités administradores de agua potable (CAAP) administran, explotan y mantienen los sistemas.

Existen varias empresas privadas pequeñas; algunas distribuyen agua en camiones cisterna. La principal es la Compañía Nacional de Agua de Mariscal, que, según se estima, presta servicios al 14% de la población en la Ciudad de Guatemala.

Se prevé que el sector se reformará. El Gobierno estudia la posibilidad de promover la participación privada mediante concesiones u otros medios. Asimismo, hay algunas iniciativas a nivel municipal en la Ciudad de Guatemala. El Gobierno se propone también mejorar la recuperación de los gastos. La falta de un marco regulatorio adecuado y de una autoridad regulatoria independiente obstaculiza esos esfuerzos.

b) Electricidad

El Instituto Nacional de Electrificación (INDE), empresa nacional de servicio público y de propiedad estatal establecida por decreto ley N° 1287, de 27 de mayo de 1959, está a cargo de la generación y transmisión a nivel nacional de energía eléctrica, así como de su distribución fuera de la Ciudad de Guatemala.

Estadísticas del sector

Capacidad instalada neta en 1995 (en MW):

| | |
|-----------------------|-----|
| · térmica | 328 |
| · hidroeléctrica..... | 438 |
| · TOTAL | 766 |

| | |
|--|----|
| Porcentaje de la población con instalaciones en su vivienda en 1989..... | 31 |
|--|----|

La Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. (EEGSA), creada en 1894 y que antes era filial de la Boise Cascade, pero que desde 1972 está mayoritariamente en manos del Estado, distribuye electricidad en la Ciudad de Guatemala y zonas aledañas. La EEGSA también es una empresa de generación; toda la nueva capacidad instalada desde 1986 se debe a ella, que ha firmado también contratos con productores y cogeneradores independientes.

Existen también 12 pequeñas empresas de distribución de propiedad municipal. En su mayoría compran energía eléctrica del INDE, pero tienen cierta capacidad de generarla, incluso con pequeñas centrales hidroeléctricas.

El Gobierno empezó a alentar la participación privada en el sector eléctrico a mediados del decenio de 1980, en virtud del decreto ley N° 20-86, "Ley de Promoción de las Fuentes Nuevas y Renovables de Energía", con que alentó la participación privada en la generación basada en recursos nuevos y renovables. Otras iniciativas ofrecieron al sector privado nuevas oportunidades de generar energía que se plasmaron en varios contratos. Tanto el INDE como la EEGSA han negociado acuerdos de compra de energía eléctrica con productores independientes y se proponen negociar otros acuerdos.

Finalmente, en 1996 fue aprobada la "Ley General de Electricidad", en la que se estipula el principal marco regulatorio del sector. La ley separa las funciones institucionales en el sector, abre el sector a la participación privada nacional y extranjera, desmonopoliza la producción eléctrica, promueve la competencia en la prestación de servicios, regula el funcionamiento del mercado mayorista, conformado por los generadores con capacidades mayores de 5 MW y los transportistas que se encuentran instalados y conectados al Sistema Nacional Interconectado, y establece que una misma persona al efectuar simultáneamente las actividades de generar (con potencias instaladas mayores a 5 MW) y transportar y/o distribuir energía debe realizarlo a través de empresas o personas jurídicas diferentes.

El rol regulatorio en el sector queda delegado en la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, organismo técnico y autónomo con personalidad jurídica propia. A la Comisión le incumbe la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la Ley General de Electricidad, de supervisar las actividades de empresas de generación, transmisión y distribución, de proteger los derechos de los usuarios y velar por que la competencia en el sector no resulte socavada, de dirimir controversias entre los agentes del subsector eléctrico, y de definir las tarifas de transmisión y distribución sujetas a regulación, así como la metodología de cálculo de las mismas. Su presupuesto es cubierto con una tasa pagada por los generadores y los

adjudicatarios de transporte y distribución de energía eléctrica. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) es responsable de formular y coordinar las políticas, planes, programas indicativos, emitir las normas relativas al sector eléctrico y fiscalizar su cumplimiento.

En 1997, la EEGSA puso en licitación el 90% de los activos de la planta de Laguna en Amatitlán y la planta de Stewart & Stevenson, en la provincia de Escuintla, ambas termoeléctricas, con una capacidad combinada de unos 177 MW. La ganadora fue la compañía *Guatemalan Generating Group* (GGG), filial de la *Constellation Power Development*. La GGG venderá electricidad a la EEGSA sobre la base de un acuerdo de compra de energía eléctrica. El 10% restante del capital podrá ser adquirido por los empleados de la empresa.

El INDE también se propone atraer inversiones del sector privado para aprovechar las enormes posibilidades geotérmicas del país. Recientemente dio una concesión de 25 años a Orzunil S.A. para la construcción y operación de una central de energía geotérmica de 24 MW cuya terminación, prevista para 1998. La INDE se privatizaría en un futuro cercano.

7. Haití

El Gobierno de Haití ha anunciado que se propone privatizar varias empresas de propiedad estatal, entre ellas Electricité d'Haiti (EdH), la empresa nacional de electricidad. Se reestructurará el sector del abastecimiento de agua potable y el saneamiento. El propósito de las reformas será establecer mecanismos apropiados para el sector privado y alentar su participación. El Gobierno se propone asignar parte de los ingresos de la privatización al mejoramiento de la infraestructura ambiental y los servicios sociales, en particular en las zonas rurales, lo cual podría abarcar las instalaciones de abastecimiento de agua potable y alcantarillado.

El BID ha aprobado recientemente un préstamo en apoyo de la reforma municipal, que se centrará en el logro de mejores servicios públicos mediante la recuperación de los costos, la rendición de cuentas y la eficiencia a nivel municipal.

a) Abastecimiento de agua potable y saneamiento

El abastecimiento de agua potable incumbe primordialmente a los municipios, pero en la práctica es el ministerio de obras públicas (*Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications*), el principal encargado al respecto, mediante dos organismos públicos: la *Centrale Autonome Métropolitaine d'Eau Potable* (CAMEP), creada en 1964, que se encarga de los servicios en Port-au-Prince, y el *Service National d'Eau Potable* (SNEP),

establecido en 1977, que se encarga del resto del país. El Ministerio de Salud se encarga de las localidades de menos de 2.000 habitantes, pero organizaciones no gubernamentales han construido la mayor parte de las instalaciones. Comités locales explotan los sistemas.

Cobertura estimada

Existe un bajo nivel de abastecimiento de agua potable, porque se atiende al 53% de la población en Port-au-Prince, a una media del 59% en otras 72 ciudades, aunque esta cifra varía considerablemente de una a otra, y al 34% de la población en las zonas rurales. En Port-au-Prince, aproximadamente el 15% de la población tiene conexiones domiciliarias; las pérdidas de agua se calculan en aproximadamente un 60%. Solamente el 43% de la población en las zonas urbanas y el 16% en las zonas rurales tiene acceso a servicios para eliminar higiénicamente los excrementos.

En agosto de 1996, el Gobierno estableció una unidad en el ministerio de obras públicas para preparar la reforma del sector de agua potable. Con las reformas propuestas se trata de establecer un nuevo marco jurídico e institucional del sector, incluidas la separación entre la prestación de servicios y la función reguladora, la gradual descentralización de la prestación de servicios hasta el plano municipal y de otros actores locales, la aplicación de un sistema apropiado de recuperación de los gastos, y la creación de oportunidades para la participación del sector privado en la explotación y gestión. Se proponen dos nuevos organismos reguladores: un consejo nacional del agua, que se encargaría de la gestión de los recursos hídricos, incluyendo la asignación y regulación de derechos de agua, y el *Conseil de Régulation de l'Eau Potable et de l'Assainissement* (CREPA), entidad independiente que se encargaría de la formulación de políticas, la coordinación del financiamiento de inversiones en el sector y la regulación de los servicios de agua potable y saneamiento.

La CAMEP y el SNEP se fusionarían en la *Office National de l'Eau Potable et de l'Assainissement* (ONEPA), que asumiría la responsabilidad relativa a la prestación de servicios en ciudades más grandes. La prestación de servicios se traspasaría al sector privado con arreglo a un contrato de arriendo. En las reformas se prevé que en otras ciudades (de 5.000 a 20.000 habitantes), de las que actualmente es responsable el SNEP, la ONEPA inicialmente se encargaría de la prestación de los servicios a través de sus oficinas locales que gozarían de autonomía financiera. A mediano plazo, las opciones incluyen la transferencia de las oficinas locales de la ONEPA al sector privado, el cual las operaría en virtud de contratos con la ONEPA o con las respectivas municipalidades, o a empresas municipales y inter-municipales, que gozarían de un alto grado de autonomía. En las localidades más pequeñas, los comités locales de abastecimiento de agua potable y saneamiento se encargarán de administrar los sistemas. Los sistemas serían operados y mantenidos por un ingeniero designado por el comité.

b) Electricidad

Electricité d'Haiti (EdH) se encarga de la generación, transmisión y distribución de toda la energía eléctrica. Al ser establecida en 1971 se hizo cargo de la central hidroeléctrica estatal de Peligre y la *Compagnie d'Éclairage Électrique*, de propiedad privada. Los grandes consumidores suelen tener su propio equipo eléctrico.

Estadísticas del sector

Capacidad instalada neta en 1995 (en MW):

| | |
|-----------------------|-----|
| • térmica..... | 83 |
| • hidroeléctrica..... | 70 |
| • TOTAL | 153 |

| | |
|--|----|
| Porcentaje de la población con instalaciones en su vivienda en 1989..... | 10 |
|--|----|

EdH está incluida en el programa de privatización propuesto. Actualmente se prevé que el Gobierno siga siendo el principal accionista, pero que traspase el control de la gestión a inversionistas privados y guarde una participación minoritaria sustancial. Según se informa, el Gobierno también ha expresado interés en la privatización mediante la capitalización.

El BID ha aprobado recientemente un programa de cooperación técnica no reembolsable para ayudar a reformar el sector eléctrico. El financiamiento se utilizará para analizar las opciones para la reorganización del sector con mayor participación del sector privado, así como para formular y establecer el marco jurídico e institucional correspondiente, y ayudar a establecer una unidad administrativa que se encargue de la reforma del sector.

8. Honduras

En Honduras, la privatización empezó en la segunda mitad del decenio de 1980. Muchas empresas se han privatizado con éxito y el país entra en una segunda fase con la privatización de las empresas de servicios de utilidad pública. El Gobierno estudia numerosas iniciativas de participación privada en la prestación de servicios de infraestructura, al tiempo que crece el interés en ellas. Una nueva ley de electricidad abrió el camino a la participación privada en su generación y distribución y han surgido algunas iniciativas en el sector del abastecimiento de agua potable y el alcantarillado.

En el decreto N° 161-85, por el que se regula el proceso de privatización, se establecen los procedimientos que han de observarse para la reestructuración jurídica y financiera, las evaluaciones técnicas, las políticas de traspaso, etc. En los decretos N° 03-93 y 04-93 se estipuló que las normas contenidas en el decreto N° 161-85 se aplicaban a todos los organismos públicos. La oficina de instituciones descentralizadas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público coordina, dirige y vigila el proceso de privatización. La Comisión Consultiva de Privatización, creada por los decretos N° 03-93 y 04-93, asesora al Gobierno sobre los asuntos relacionados con esa materia.

En septiembre de 1996, el Gobierno y el sector privado proclamaron el "Plan de Transformación Nacional", cuyo objetivo es atraer inversiones por un monto de 18.000 millones de dólares EE.UU. en un plazo de 25 años para financiar una serie de proyectos, como la generación de electricidad, la infraestructura y la agricultura, entre otros. Se prevea la construcción de dos centrales hidroeléctricas en el río Patuca.

La Comisión Nacional Supervisora de Servicios Públicos (CNSSP), creada por decreto N° 85-91, de 10 de junio de 1991, está a cargo de la regulación de los servicios públicos, entre ellos la electricidad y el abastecimiento de agua potable y alcantarillado. La CNSSP tiene el cometido de vigilar el cumplimiento de las normas de eficiencia operacional y financiera, aprobar y controlar las tarifas de los servicios públicos, y asegurar la calidad y eficiencia de la prestación de servicios. Una de sus funciones es conocer sobre las iniciativas de privatización que se tomen en el seno de las instituciones autónomas que prestan servicios públicos.

a) Abastecimiento de agua potable y saneamiento

El abastecimiento de agua potable y el saneamiento incumben oficialmente a los municipios. Sin embargo, el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) planifica, diseña, construye, explota y mantiene los sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado en Tegucigalpa y otros lugares. En las zonas rurales, la administración de los sistemas construidos por el SANAA se delega a las juntas administradoras. Algunos proveedores privados y ciertas comunidades en las zonas rurales y las zonas urbanas de bajos ingresos prestan también servicios a pequeña escala.

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) financia proyectos de infraestructura social y económica y de otra índole, incluida la instalación de sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento, aljibes y letrinas. El propietario final del proyecto, el SANAA o el municipio pertinente, se encarga del funcionamiento y el mantenimiento.

El sector privado ha desempeñado tan sólo un papel marginal en la prestación de servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento, que se ha limitado sobre todo a contratos de diseño y construcción. Algunos municipios celebran contratos con el sector privado para la realización de ciertas tareas.

Cobertura estimada

Aproximadamente el 91% de la población urbana cuenta con agua potable (el 77% dentro de su vivienda), en comparación con el 66% de la población rural (el 49% dentro de su vivienda). En muchos sistemas pequeños, el abastecimiento no es continuo. El total de las pérdidas de agua en Tegucigalpa y San Pedro Sula se calcula en un 50%. Aproximadamente el 95% de la población urbana tiene servicios de eliminación higiénica de excrementos (el 54% mediante empalmes de alcantarillado), pero solamente el 71% de la población rural tiene esos servicios (el 11% mediante empalmes de alcantarillado). Sólo se trata el 3% de las aguas servidas. El Gobierno tiene previsto que el abastecimiento de agua potable y el saneamiento sean universales para el año 2005.

Se proponen reformas que abrieran el sector a la participación privada y establecerían un sistema de tarifas basado en la recuperación de los costos. Los sistemas que actualmente están a cargo del SANAA se traspasarían a los municipios y el SANAA se reestructuraría para prestar asistencia técnica. El sector privado podría participar en la prestación de servicios mediante contratos de servicios, contratos de gestión y concesiones. Las primeras zonas donde se prevé que se concrete la participación del sector privado son Tegucigalpa y, en particular, la ciudad de San Pedro Sula, donde se ha expresado interés por establecer una empresa de capital mixto para prestar servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento. Se estudia la posibilidad de que el sector privado intervenga en la prestación de servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento mediante concesiones y otras formas de participación, al igual que la posibilidad de ejecutar un proyecto de BOT en relación con un acueducto en el valle de Sula.

La Comisión Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (CONAPA), que depende de la Secretaría de Salud Pública, se encargará de la regulación y supervisión. Gozará de un alto grado de autonomía operacional y financiera. En las reformas se prevé también el establecimiento de un organismo financiero especializado que otorgue créditos y canalice al sector recursos no reembolsables.

b) Electricidad

Hasta la reciente reorganización del sector, participaban de la industria la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), un organismo estatal autónomo y verticalmente integrado creado por Decreto Ley N° 48, del 20 de febrero de 1957, que se encargaba de la generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, así como del despacho de carga. Además hay dos empresas privadas, una autoproductora, y la otra, una pequeña empresa, verticalmente integrada, encargada de la prestación de servicios en la isla de Roatán.

Las reformas de la industria eléctrica empezaron en 1991 con la creación de la CNSSP, responsable de regular la prestación de servicios de electricidad, y la Comisión Nacional de Energía (CNE), responsable de asesorar al Gobierno en la elaboración de planes, políticas y normas para el sector y de realizar estudios técnicos de oferta y demanda y de los precios de energía. En

noviembre de 1994, el Congreso Nacional aprobó mediante el decreto N° 158-94, la llamada "Ley Marco del Subsector Eléctrico". La ley persigue como objetivo principal regular las actividades del sector, aplicándose a todos los actores, independientemente de su régimen de propiedad. Sus objetivos principales son establecer las condiciones para satisfacer la demanda eléctrica del país al mínimo costo; promover la operación económica, segura y confiable del sistema eléctrico; proteger los derechos de los usuarios; facilitar la participación de la empresa privada en las actividades de generación y fomentarla en las de distribución; impedir prácticas desleales o abuso de posición dominante en el mercado; regular aquellas actividades cuya naturaleza impida o restrinja la libre competencia; promover la competitividad de los mercados de producción y demanda de electricidad para asegurar el suministro a largo plazo; y alentar la realización de inversiones privadas en producción y distribución.

Se creó el Gabinete Energético, encabezado por el Presidente de la República e integrado por seis secretarios de Estado, con funciones de definir y formular las políticas del sector energético; la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), un organismo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones, Obras Públicas y Transportes (SECOPT), con funciones de asesor técnico para la aplicación de la ley; y un fondo social de desarrollo eléctrico, administrado por la ENEE y capitalizado con aportes del Gobierno Central y de las empresas del sector, para financiar los estudios y obras de electrificación de interés social. Se mantienen vigentes la CNE y la CNSSP. Le corresponde a la CNEE aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas que rigen el sector; aprobar y poner en vigencia las tarifas en barra y proponer por medio de la SECOPT a la CNSSP las tarifas para el consumidor final; presentar a la aprobación del Gabinete Energético los programas de expansión; proponer a la aprobación de la SECOPT los contratos de compra de energía que se disponga a firmar la ENEE; dictaminar sobre los contratos de venta de energía a las empresas distribuidoras para la aprobación por la SECOPT; proponer a la aprobación del Gabinete Energético la concesión de uso de los recursos naturales renovables para la generación eléctrica; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias; y determinar las bases y condiciones de selección para otorgar concesiones de distribución y generación de electricidad. Además le corresponde proponer a la aprobación del Gabinete Energético una mayor liberación del mercado. Las empresas del sector eléctrico sólo pueden operar mediante contratos de operación celebrados con la SECOPT, previo dictamen de la CNEE.

La ley establece una nueva estructura de la industrial eléctrica. En la generación pueden participar, mediante la construcción de nuevas centrales o el arrendamiento de centrales existentes, empresas públicas, privadas y mixtas, que podrán vender la energía eléctrica directamente a un gran consumidor o a una empresa distribuidora; o, venderla a la

Estadísticas del sector

Capacidad instalada neta en 1995 (en MW):

| | |
|-----------------------|-----|
| · térmica..... | 175 |
| · hidroeléctrica..... | 130 |
| · TOTAL | 305 |

Porcentaje de la población con instalaciones

| | |
|-----------------------------|----|
| en su vivienda en 1989..... | 34 |
|-----------------------------|----|

ENEE. En el segundo caso, si la venta es iniciativa propia de la empresa generadora, la ENEE pagará las compras al costo marginal de corto plazo; pero si la operación es promovida por la ENEE, entonces la tarifa será la que resulte de la respectiva licitación. En la transmisión, el Estado se reserva para sí la conducción de la operación del sistema de transmisión y el centro de despacho, pero las empresas públicas, privadas o mixtas pueden operar la red de transmisión de su propiedad o que les arriende el Estado. En cuanto a la distribución, la ley establece que ésta debe prioritariamente ser realizada por empresas privadas, aunque también pueden participar empresas municipales o cooperativas. Las empresas de transmisión y distribución deben permitir la conexión a sus instalaciones de cualquier empresa eléctrica o gran consumidor que la solicite, así como el uso remunerado de sus líneas.

En la ley se prevé que la ENEE se reestructure verticalmente, mediante la separación de los segmentos de la generación y transmisión, del segmento de la distribución, y horizontalmente. La ENEE debe vender a inversionistas privados, municipalidades o cooperativas, total o parcialmente, sus sistemas de distribución. Antes de la privatización, a propuesta de la ENEE se procederá a dividir al país en zonas de distribución, de forma tal que cada una de ellas sea técnicamente viable y económicamente rentable. Las empresas de distribución pueden contar con facilidades de generación (i) en el caso de sistemas aislados no interconectados; y (ii) en el caso de sistemas interconectados solamente cuando ésta sea la única manera de prestar el servicio, o sea la forma más económica de hacerlo a criterio de la CNEE.

Algunos productores independientes de energía eléctrica ya están participando en el sector. El primer generador y proveedor privado de electricidad a la red nacional fue Electricidad de Cortés (ELCOSA), empresa conjunta formada por industrias nacionales e inversionistas extranjeros. El BID ha aprobado recientemente un préstamo - el primero con que financia directamente una empresa del sector privado sin garantía gubernamental - para que ELCOSA pueda aumentar la capacidad de su planta.

El BID ha aprobado también un programa de cooperación técnica no reembolsable para ayudar a reestructurar y promover la participación privada en el sector eléctrico, y atraer capital de riesgo del sector privado hondureño. Los recursos se utilizarán para crear e implantar el marco regulatorio, organizar, equipar y poner en marcha los organismos responsables de la regulación y formar recursos humanos.

9. Jamaica

El Gobierno de Jamaica lleva a cabo un programa de reformas económicas centrado en la reducción de la magnitud y la envergadura del sector público en las actividades comerciales, a la vez que crea un entorno competitivo y propicio para estimular la inversión privada en todos los sectores de la economía. Se prevé que el sector privado participe en el abastecimiento de agua potable y el alcantarillado y ya se hacen reformas en el sector de la electricidad.

Es política gubernamental que todos los servicios públicos se regulen en el marco de un solo organismo. En consonancia con esa política, la autoridad reguladora se encuentra delegada en la *Office of Utility Regulation* (OUR), establecida en virtud de la *Office of Utilities Regulation Act* de 1995. La OUR empezó sus actividades en 1997. Regula las tarifas y la calidad de los servicios de electricidad y de agua y alcantarillado.

a) Abastecimiento de agua potable y saneamiento

La *National Water Commission* (NWC), organismo paraestatal reconocido como corporación que se estableció en 1980 luego de la fusión de la Comisión de Aguas de Kingston and St. Andrew y la Dirección Nacional de Aguas, al amparo de la Ley de la Dirección Nacional de Aguas (Cambio de Denominación y Enmienda), se encarga de la planificación, la construcción, la explotación y el mantenimiento de las instalaciones de abastecimiento de agua y alcantarillado en toda la isla. La NWC explota las instalaciones de abastecimiento de agua potable y

alcantarillado de la zona metropolitana de Kingston y de otras ciudades. Los ayuntamientos, o concejos parroquiales, explotan y mantienen sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento en las zonas rurales. Algunas zonas están a cargo de entidades independientes. La *Carib Engineering Corporation Limited*, de propiedad pública, construye importantes proyectos de abastecimiento de agua.

Cobertura estimada

Existe un nivel relativamente alto de cobertura: el 92% de la población urbana tiene acceso al abastecimiento de agua potable (el 59% mediante instalaciones en su vivienda); en cambio, solamente el 48% de la población rural lo tiene. Sin embargo, el abastecimiento es irregular en varias zonas y se caracteriza por grandes pérdidas de agua, de hasta un 70%. El 89% de la población urbana y el 59% de la población rural cuenta con instalaciones de saneamiento. Muchas instalaciones sanitarias se mantienen en forma deficiente. De 107 plantas de tratamiento de aguas servidas, solamente 60 funcionan. Se ejecutan varios proyectos para mejorar los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento.

El Gobierno ha decidido retirar algunas funciones a la NWC, cuya privatización se prevé, aunque no a corto plazo. Hay posibilidades de que el sector privado participe en el ramo del abastecimiento de agua potable y el alcantarillado mediante contratos de servicios, como los de explotar depuradoras de aguas servidas. Actualmente se evalúan las propuestas para construir plantas de tratamiento de aguas servidas y de reciclado de efluentes en la zona metropolitana de Kingston en régimen de BOT.

b) Electricidad

La *Jamaica Public Service Company* (JPSCo) tiene la competencia exclusiva de generar, transmitir y distribuir electricidad para el consumo público. Desde agosto de 1978 goza de una "licencia eléctrica para toda la isla", con una validez de 39 años, que le asegura el monopolio. La JPSCo fue estatalizada en 1971 cuando el Gobierno adquirió la participación mayoritaria de la *Stone & Webster Corporation*. El Gobierno siguió adquiriendo acciones de la JPSCo hasta acumular un 99% en 1975. Varias empresas privadas generan electricidad para su propio consumo y algunas están conectadas a la red pública y la abastecen con una cantidad limitada de electricidad. La JPSCo puede comprar energía eléctrica de esas empresas.

Estadísticas del sector

Capacidad instalada neta en 1995 (en MW):

| | |
|-----------------------|-------|
| · térmica..... | 1 162 |
| · hidroeléctrica..... | 20 |
| · TOTAL | 1 182 |

| | |
|--|----|
| Porcentaje de la población con instalaciones en su vivienda en 1989..... | 58 |
|--|----|

El Gobierno ha anunciado que se propone privatizar la JPSCo y liberalizar el sector. En 1993, se reestructuró la JPSCo para que tuviera dos divisiones importantes, una encargada de la generación y otra de la transmisión y distribución de electricidad, así como del servicio a los clientes. El propósito de la reestructuración fue facilitar la entrada de productores independientes de energía eléctrica. En diciembre de 1996, el Gobierno anunció que los planes para la privatización de la JPSCo habían sido suspendidos. Hasta que se privatice la JPSCo, el Gobierno ha decidido alentar la participación del sector privado y permite que los productores independientes de energía actúen en el sector. Se prevé que aportarán toda la capacidad de generación nueva. La JPSCo ha concertado varios acuerdos con productores independientes de energía eléctrica para que suministren electricidad a la red.

10. México

El Gobierno de México ya ha privatizado la mayor parte de las empresas de propiedad estatal. Actualmente se centra en modernizar y reorganizar los servicios de infraestructura, entre ellos el abastecimiento de agua potable, el saneamiento, el tratamiento de las aguas servidas, la energía eléctrica y el riego y el drenaje. Se liberaliza el sector de la energía eléctrica; ya hay cierta participación del sector privado en los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento, en particular en el tratamiento de las aguas servidas; y actualmente se ejecuta con éxito uno de los programas de traspaso de la gestión del riego más ambiciosos del mundo. La participación del sector privado en la prestación de servicios públicos relacionados con el agua no se produce debido a una cesión, o desincorporación, de las empresas estatales, sino que adopta la forma de concesiones, contratos de BOT, empresas conjuntas, etc.

La Comisión Intersecretarial de Desincorporación creada en 1995 dirige el proceso de la privatización. Está compuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), y, en cada sector a ser privatizado, el miembro del gabinete responsable de coordinarlo. El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) concede préstamos y tiene un programa de garantías para el desarrollo de la infraestructura.

En 1995, el Gobierno estableció el Fondo de Inversión en Infraestructura (FINFRA), destinado a alentar los nuevos proyectos del sector privado. El FINFRA empezó sus actividades con unos 250 millones de dólares EE.UU. y se financiará con los ingresos producto de la privatización. Promueve las inversiones del sector privado en infraestructura, suministrando para ello capital tanto de riesgo como subordinado. Apoya, entre otros, proyectos ambientales, instalaciones de abastecimiento de agua y de tratamiento de desechos, puertos e infraestructura urbana. Junto con BANOBRAS, también prestará otros servicios, como los de promoción de proyectos, garantías, asistencia técnica y financiera, etc.

En virtud de la Ley de Aguas Nacionales, de 1º de diciembre de 1992, la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales se realiza (i) por particulares mediante concesiones, y (ii) por dependencias y organismos públicos mediante asignaciones, todas otorgadas por la Comisión Nacional del Agua (CNA). El término de la concesión o asignación no puede ser menor de cinco ni mayor de 50 años. Con arreglo a la Ley Federal de Derechos de Materia de Agua, quienes utilicen aguas del dominio público de la Nación para el abastecimiento de agua potable, generación hidroeléctrica, acuicultura, etc. están obligadas al pago del derecho sobre agua. No se paga el derecho por usos agropecuarios, incluyendo a los distritos y unidades de riego. La ley dispone también el pago por el uso de los cauces y otros inmuebles; por la descarga de aguas servidas; y por la expedición y modificación de títulos de asignación o concesión y permisos de descargas. No están obligados al pago de derechos por las descargas de aguas residuales quienes cumplan con todos los parámetros establecidos en las condiciones particulares de descargas, o a falta de éstas, en las normas técnicas ecológicas.

a) Abastecimiento de agua potable y saneamiento

Los gobiernos municipales se encargan de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento. Además, hay comisiones estatales de abastecimiento de agua potable y alcantarillado; algunas solamente prestan asistencia técnica, mientras que otras -con la anuencia de los municipios interesados- están directamente a cargo de la construcción, explotación y administración de sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado.

En virtud de la Ley de Aguas Nacionales y de su reglamento, la utilización de los recursos hídricos para el abastecimiento de centros de población o asentamientos humanos requiere, con respecto a los derechos de aguas, una "asignación para uso público urbano" de la CNA. La CNA concede tales asignaciones a las respectivas municipalidades y al Gobierno del Distrito Federal o, en caso de que un municipio no pueda prestar directamente el servicio, a entidades paraestatales, paramunicipales y otras entidades que administran los sistemas. En caso de que se concesionen por el municipio los servicios de agua potable y alcantarillado, las asignaciones de agua se hacen en todo caso a los municipios que tienen a su cargo la prestación de dicho servicio público.

Cobertura estimada

Aproximadamente el 84% de la población tiene acceso al abastecimiento de agua potable y cerca del 67% a los servicios de alcantarillado, pero hay enormes diferencias entre los estados federales y el nivel de tratamiento de las aguas servidas es bajo. La cobertura adolece de importantes deficiencias en las zonas rurales, donde solamente un 53% de la población tiene acceso al abastecimiento de agua potable y un 21% al saneamiento. Unos 15,1 millones de personas no tienen servicios de agua potable y aproximadamente 30,2 millones de personas no tienen servicios de alcantarillado. Se ha propuesto aumentar la cobertura del abastecimiento de agua potable y de los servicios de alcantarillado y saneamiento al 88% y el 76%, respectivamente, entre 1995 y el año 2000. Se ha ampliado la capacidad de tratamiento de las aguas servidas en los últimos años y el Gobierno prevé tratar todas las aguas servidas urbanas de origen doméstico antes de que termine el presente decenio.

| Zonas urbanas y rurales por región | Déficit de la cobertura (%) | |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| | Abastecimiento de agua | Alcantarillado |
| Centro | 16 | 32 |
| Centro Norte | 7 | 32 |
| Distrito Federal | 3 | 5 |
| Nordeste | 23 | 34 |
| Noroeste | 11 | 33 |
| Sudeste | 31 | 53 |

Para mejorar los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento, la CNA, en colaboración con los gobiernos estatales y municipales, promueve la creación de organismos operadores administrativamente autónomos, que administren los sistemas. Ya se han establecido organismos operadores en casi todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. Actualmente hay 791 organismos operadores que prestan servicios de agua potable y saneamiento en 22.444 localidades. Se ha creado una Asociación Nacional de Organismos de Agua Potable y Alcantarillado (ANOAPA).

El Gobierno alienta la participación del sector privado en la prestación de servicios. En la Ley de Aguas Nacionales se declara de interés público la promoción y fomento de la participación del sector privado en el financiamiento, construcción y operación de infraestructura hidráulica, así como en la prestación de los servicios respectivos. Se prevén distintos mecanismos para hacer concurrir esta participación; desde los contratos de obra pública tradicionales, hasta los contratos de obras y servicios con financiamiento recuperable y los esquemas de concesionamiento.

En 1993, la Comisión de Agua del Distrito Federal (CADF), creada por un decreto de privatización del Distrito Federal, de julio de 1992, concedió a cuatro consorcios privados contratos de 10 años, con derecho a prórroga, para renovar y mejorar los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de la Ciudad de México. El Distrito Federal se ha dividido en cuatro zonas de la misma extensión y se han concedido contratos a un contratista distinto para cada zona. Los contratistas se encargan solamente de las operaciones y de los aspectos comerciales de la distribución, no de la producción. El Distrito Federal sigue siendo propietario de la infraestructura y controlando los aspectos normativos. Los contratos constan de tres fases y facultan a los contratistas a negociar contratos distintos para cada fase en su zona. La primera fase entrañó preparar un censo de los clientes, actualizar los registros de clientes, instalar medidores, levantar un mapa del sistema de distribución, determinar el estado en que se encontraba el sistema, etc. La segunda fase abarca el desarrollo y la aplicación de un sistema de facturación y cobranza. Actualmente se prevé que, en la tercera fase, los contratistas comprarán agua al por mayor al Distrito Federal y asumirán toda la responsabilidad de las actividades comerciales y de distribución, pero la decisión de ejecutar, aplazar o cancelar esa fase depende de la CADF. Las primeras dos fases están estructuradas como contratos de servicios a base de honorarios, es decir que se retribuye a los contratistas por los servicios prestados. En la tercera fase, la retribución se vincularía con el cobro de las tarifas. El proceso de constitución de los contratistas privados ha sido más lento de lo inicialmente previsto.

En otras ciudades, los arreglos contractuales varían desde arreglos de BOT (en general por períodos de 10 a 15 años), en particular para el tratamiento de las aguas servidas, hasta una combinación de contratos de concesión, arriendo y servicios. Existe también interés en la concesión de plantas ya construidas. Se han empezado a firmar contratos de BOT y de concesión en el sector del abastecimiento de agua potable para abastecer de agua al por mayor a algunas ciudades y zonas industriales. Otras oportunidades comerciales se relacionan con los sistemas de tratamiento de los efluentes industriales para grandes usuarios o grupos de usuarios, como las zonas industriales, y con los sistemas de reciclaje de las aguas servidas.

Los contratos se adjudican mediante licitación pública. Los factores que se tienen en cuenta al adjudicar un contrato son el precio y los méritos técnicos, así como la capacidad financiera, la experiencia y los conocimientos operacionales del licitador. Participan en el proceso el Gobierno federal, el estatal y el municipal. El Gobierno federal, por conducto de la CNA, supervisa todo el proceso y prepara los pliegos de condiciones, evalúa las ofertas, etc. Los municipios, por conducto de los organismos de explotación, administran todo el proceso y se encargan de la contratación. Los gobiernos de los estados federales brindan garantías financieras. BANOBRAS brinda garantías respecto de impago municipal o estatal.

Se han concedido contratos a varias empresas. Muchas sociedades extranjeras forman empresas mixtas con firmas nacionales. Aquéllas brindan gran parte del equipo y los servicios de ingeniería requeridos y éstas se encargan de la construcción. Muchos proyectos de tratamiento de aguas servidas han atraído la participación de capital extranjero proveniente de fondos especializados en capital de riesgo para empresas ambientales y de grandes inversionistas institucionales.

b) Electricidad

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, tiene la competencia exclusiva del servicio público de electricidad. La CFE genera, transmite y distribuye electricidad a todo el país, excepto en el caso de la distribución y comercialización en la zona central del país de lo cual se encarga el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro (LFC).

Estadísticas del sector

Capacidad instalada neta en 1995 (en MW):

| | |
|-----------------------|--------|
| · térmica..... | 32 139 |
| · hidroeléctrica..... | 10 013 |
| · nuclear | 1 350 |
| · geotérmica..... | 755 |
| · TOTAL | 44 257 |

| | |
|---|----|
| Porcentaje de la población con instalaciones en su vivienda en 1989 | 86 |
|---|----|

Si bien la única autorizada a generar electricidad térmica es la CFE, ésta comparte la autoridad administrativa en materia de hidroelectricidad con la CNA. Para utilizar las aguas nacionales con miras a generar electricidad, salvo en pequeña escala, se requiere una concesión de la CNA. La CNA otorga a la CFE la asignación de aguas nacionales para la generación de electricidad en las que se especifica el volumen de agua destinado a la generación de electricidad y enfriamiento de plantas, así como las causas por las cuales se puede terminar la asignación. La CNA tiene la responsabilidad de realizar la programación periódica de extracción del agua y de su distribución, para coordinar el aprovechamiento hidroeléctrico con los demás usos del agua. La CFE participa en la programación hidráulica que realiza la CNA. El Ejecutivo Federal determina si las obras hidráulicas correspondientes al sistema hidroeléctrico deben realizarse por la CNA o por la CFE.

La Secretaría de Energía (SE) formula la política nacional de energía. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) es un órgano desconcentrado de la SE con autonomía técnica y operativa en el desempeño de sus atribuciones, responsable de regular las actividades de los operadores públicos y privados en materia de energía eléctrica y gas natural. La CRE tiene las atribuciones siguientes: participar en la determinación de las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica; otorgar y revocar los permisos y autorizaciones que se requieren para la realización de las actividades reguladas; aprobar las metodologías para el cálculo de las contraprestaciones por la adquisición de energía eléctrica que se destine al servicio público así como por los servicios de conducción, transformación y entrega de energía eléctrica; y opinar, a solicitud de la SE, sobre el programa sectorial en materia de energía, sobre las necesidades de crecimiento de capacidad de generación, sobre la conveniencia de que la CFE ejecute los proyectos o que los particulares sean convocados para suministrar la energía eléctrica y sobre los términos y condiciones de las convocatorias y bases de licitación correspondientes. La SE creó en mayo de 1996 la Unidad de Promoción de Inversiones con el objetivo de promover, fomentar y coordinar la participación e inversión del sector privado dentro del sector energético.

En virtud de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica corresponde exclusivamente a la Nación, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. Sin embargo, a fin de promover la participación del sector privado, se han realizado modificaciones al marco regulatorio.

En virtud de la reforma del 23 de diciembre de 1992, se autoriza la participación privada en la generación de electricidad, en actividades que no constituyan servicio público. Estas actividades son las siguientes: (i) la generación de electricidad para autoabastecimiento, cogeneración o pequeña producción; (ii) la generación que realicen los productores independientes para su venta a la CFE o LFC; (iii) la generación para su exportación, derivada de cogeneración, producción independiente y pequeña producción; (iv) la importación de energía eléctrica, destinada exclusivamente al autoabastecimiento; y (v) la generación de electricidad destinada a uso en emergencias derivadas de interrupciones en el servicio público de energía eléctrica. Salvo la última actividad mencionada, las demás están sujetas al otorgamiento de los permisos y las autorizaciones correspondiente por parte de la CRE. La pequeña producción se define como la generación de electricidad destinada para su venta a la CFE o LFC, con capacidad total no mayor de 30 MW, o bien para el autoabastecimiento de pequeñas comunidades rurales o áreas aisladas; mientras que la producción independiente se define como la generación de electricidad de plantas con capacidad mayor de 30 MW y cuya energía será destinada exclusivamente para su venta a la CFE, LFC o a la exportación. Desde 1992, se han otorgado un total de 61 permisos en virtud de la nueva legislación.

Se ha continuado el desarrollo del marco regulatorio para la participación del sector privado. El 8 de octubre de 1996, la CRE aprobó el modelo de contrato de adhesión para interconexión, el cual establece la relación contractual entre la CFE y las empresas con permisos de generación de electricidad mayor a 10 MW (cogeneración y autoabastecimiento), cuando estas últimas requieran utilizar las redes de transmisión y distribución de la CFE. El 7 de enero de 1997, la CRE aprobó los modelos de convenios y contratos para compraventa de excedentes de energía eléctrica, para la aplicación y ajuste de los cargos por los servicios de transmisión y para los servicios de respaldo a celebrarse entre los permisionarios y la CFE, en las modalidades de autoabastecimiento, cogeneración, importación y exportación. Finalmente, el 25 de julio de 1997, se reforma el Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. En la reforma, entre otras cosas, se especifican con mayor precisión los conceptos de cogeneración y autoabastecimiento, se flexibilizan los requerimientos de participación del sector privado en concursos de capacidad de la CFE, y se establece la posibilidad para los particulares de construir y mantener sus propias líneas de transmisión.

Aunque, por lo menos a corto plazo, no se prevé privatizar la CFE, el nuevo marco regulatorio ha logrado atraer inversiones privadas al sector a través de los esquemas de "construcción, arrendamiento y transferencia" (BLT) y "productor externo de energía" (PEE). El PEE consiste en la operación independiente de una planta por un generador privado bajo contrato de largo plazo con la CFE para suministrar energía eléctrica. Un hito importante fue el otorgamiento en marzo de 1997 por la CRE del primer permiso para generar energía eléctrica, en la modalidad de productor independiente, al consorcio AES Mérida III, integrado por las empresas AES Yucatán, Nichimen Corporation, y Grupo Hermes. La inversión que requerirá este proyecto termoeléctrico de 532 MW se estima en unos 200 millones de dólares. La energía eléctrica que genere esta planta se venderá exclusivamente a la CFE. En proyectos de este tipo, por instrucción de la SE, la CFE debe desarrollar el proceso de licitación y emitir un fallo. Posteriormente, la CRE otorga el permiso correspondiente. En el caso del proyecto Mérida III, la vigencia del permiso es por 28 años y seis meses, renovables.

Se prevé que en 1998 se licitará 14 nuevos proyectos de generación con una capacidad conjunta de 3.932 MW, 5 paquetes de transmisión de 2.910 kilómetros y 4 paquetes de transformación. En general, se estima que de los 11.000 MW de capacidad eléctrica nueva que México necesitará antes del 2005, cerca de 9.750 MW serán subastadas a inversionistas privadas.

c) Riego y drenaje

La política gubernamental en materia de riego se basa en fomentar la participación privada mediante la cesión de las competencias de inversión, explotación y mantenimiento a grupos de usuarios, la modificación del marco jurídico del sector

a fin de promover la inversión y gestión privadas, el establecimiento de un mercado de derechos de utilización del agua (dentro de ciertos límites) y el alejamiento de las inversiones públicas de la construcción de instalaciones y su reorientación a la rehabilitación de las existentes.

Estadísticas del sector

Superficie agrícola en 1995 (en 1 000 hectáreas):

| | |
|-----------------------------|--------|
| · tierras cultivables | 25 700 |
| · tierras de regadío | 6 100 |

En México, las zonas de riego se clasifican en dos grupos amplios, más de 30 mil unidades de riego con una extensión de 2,9 millones de hectáreas, y 80 distritos de riego que abarcan de 3,3 millones de hectáreas. Las unidades de riego han sido explotadas y mantenidas por los agricultores, y lo siguen siendo. El Estado ha establecido, explotado, mantenido y sido propietario de los distritos de riego, que contienen tanto grandes empresas comerciales agropecuarias como pequeñas granjas.

El proceso de traspaso de la gestión a los distritos se inició en 1989. En la Ley de Aguas Nacionales se estipula que, en los casos en que el gobierno federal haya participado en el financiamiento, construcción, operación y administración de las obras necesarias para el funcionamiento de un distrito de riego, la CNA en un plazo perentorio procederá a traspasar su administración y operación a los usuarios. Entonces, los propios usuarios, organizados según los criterios definidos en la ley, o quienes ellos designen, administrarán, operarán, conservarán y mantendrán los distritos. En cada distrito de riego se establecerá un comité hidráulico, que actuará como órgano colegiado de concertación para un manejo adecuado del agua e infraestructura. En la ley también se estipula que los usuarios deben: (i) utilizar el agua y los servicios de riego de conformidad con el reglamento del distrito; y (ii) pagar las cuotas por servicios de riego, que deberán cubrir por lo menos los gastos de administración y operación del servicio y los de conservación y mantenimiento de las obras. Dichas cuotas se someterán a la autorización de la CNA, la cual las puede rechazar si no cumplan con criterios arriba mencionados.

En virtud del proceso de traspaso, los distritos de riego se dividen en unidades o subsistemas de riego, denominadas "módulos", que tienen de 5.000 a 20.000 hectáreas, y en cada módulo se organizan "Asociaciones Civiles", es decir de usuarios. Se les otorga un título de concesión para la utilización del agua y un permiso para utilizar la infraestructura. Las asociaciones administran, explotan y mantienen sus respectivos "módulos" y contratan al personal necesario. Las competencias de las asociaciones de usuarios se limitan a los niveles secundario e inferiores, incluida la red de canales, desagües y caminos secundarios.

A la CNA le incumbe todavía el papel rector en materia de ordenación de los recursos hídricos y sigue estando a cargo de la explotación y conservación de las obras de cabecera y las principales redes de canales y desagüe, por cuyo uso debe pagar la asociación. La CNA realiza obras de ingeniería en materia de riego y drenaje, brinda asistencia técnica y se encarga de la supervisión general de todo el distrito. Durante el proceso de traspaso, el Gobierno federal, por conducto de la CNA, brinda apoyo financiero mediante inversiones en proyectos de rehabilitación y modernización, así como en la adquisición de equipo y maquinaria para la conservación de los distritos. La CNA también traspasa su equipo de mantenimiento y su maquinaria, aunque algunas asociaciones han preferido comprar su propio equipo.

En un principio, lo que se pretendió fue establecer, como segundo eslabón, sociedades de responsabilidad limitada de interés público y capital variable (S de R.L. de I.P. y C.V.) formadas por todas las asociaciones de usuarios de un distrito. Se encargarían de la explotación y el mantenimiento de la infraestructura principal, incluida la principal red de canales, desagües y caminos, y estarían autorizadas a utilizar el resto de la maquinaria y el equipo. La CNA sigue a cargo de controlar, explotar y mantener las obras de cabecera, abastece de agua en bloques a las sociedades, y supervisa y asegura el cumplimiento de los respectivos reglamentos. Una vez traspasados los primeros distritos, el programa se ajustó y se decidió aplazar la creación de las sociedades hasta que las asociaciones de usuarios se hubieran consolidado.

Desde el inicio del programa de traspaso en 1989 hasta agosto de 1996, se ha transferido la infraestructura correspondiente a 2,821 millones de hectáreas (87% de la superficie total de los distritos de riego) a 404 mil usuarios organizados en 372 asociaciones civiles y siete sociedades. Hasta la fecha, el traspaso ha dado resultados positivos y la opinión general de los usuarios es que la gestión de las aguas y la explotación y el mantenimiento de la infraestructura han mejorado.

d) Transporte por vías navegables interiores

Se ha otorgado una importante concesión al Grupo Protexa de México y a Boskalis de los Países Bajos para construir, explotar y mantener un canal intracostero de 438 kilómetros entre el puerto de

Tampico (México) y las vías navegables intracosteras de los Estados Unidos en Brownsville, Texas. Con el proyecto, que costará 756 millones de dólares EE.UU., se creará una vía de navegación directa entre el puerto de Tampico y los puertos fluviales interiores de los Estados Unidos, incluidos los de Chicago, Kansas City y Pittsburgh. Se prevé que la ruta resulte más barata que otros medios, como el transporte por carretera o el ferrocarril.

Estadísticas del sector

Cursos de agua interiores: 2.900 km de ríos navegables y canales costeros.

11. Nicaragua

Las Corporaciones Nacionales del Sector Público (CORNAP), establecidas por decreto ley N° 7-90, de 2 de mayo de 1990, supervisan la privatización de las empresas estatales. El Comité Ejecutivo para la Reforma de la Administración Pública (CERAP) está a cargo de la reorganización y modernización del sector público. A la Comisión de Reforma de Empresas Públicas le incumben funciones similares con respecto al sector de la infraestructura.

Actualmente se reforman y reestructuran varias empresas y ministerios relacionados con los servicios públicos, incluidos los de los sectores de la energía y del abastecimiento de agua potable y alcantarillado. El programa, financiado por el BID, consta de una serie de reformas jurídicas e institucionales que aumentarán la participación del sector privado en la prestación de servicios públicos. También prevé la separación de las funciones regulatorias y normativas del Estado y la empresarial de prestar servicios. Órganos regulatorios autónomos se encargarán de los asuntos de regulación, como la fijación de tarifas, mientras que los ministerios estatales se encargarán de la formulación de políticas.

a) Abastecimiento de agua potable y saneamiento

El Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) se encarga de todos los aspectos de los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado. El INAA, por conducto de seis Delegaciones Regionales, explota 148 sistemas de abastecimiento de agua potable en 170 pueblos y aldeas, así como 20 sistemas de alcantarillado, ocho de ellos con instalaciones de tratamiento de las aguas servidas.

Según se prevé, se reformará el sector de abastecimiento de agua potable y alcantarillado. En las reformas propuestas se estipula separar las funciones reguladoras y las comerciales y de producción, aplicar una legislación común a las empresas públicas y privadas y establecer un marco regulatorio y un sistema de tarifas que promueva la eficiencia y la autofinanciación y atienda debidamente a los clientes, con subsidios para los grupos de bajos ingresos.

Cobertura estimada

En Nicaragua, el 81% de la población urbana tiene acceso al abastecimiento de agua potable, en comparación con un 28% de la población rural. El 34% de la población urbana cuenta con servicios de alcantarillado. Se trata el 21% de las aguas servidas. El principal reto que encara el sector es el aumento de la cobertura y de la calidad del servicio. Muchos sistemas son anticuados, aproximadamente una cuarta parte se consideran desgastados por lo que la calidad del agua que suministran se ve afectada, 49 nunca satisfacen la demanda y 23 no la satisfacen durante los períodos de sequía, 17 abastecen de agua que no es apta para el consumo humano, las pérdidas de agua ascienden a un 41%, la cobertura de 87 redes de distribución es solamente parcial y el 30% de las cañerías en las redes de distribución está deteriorado. Incluso en las zonas urbanas, muchos clientes reciben agua sólo en forma intermitente.

Para que las reformas se lleven a cabo es preciso aprobar tres proyectos de ley para crear un órgano regulatorio, disponer la planificación sectorial y redactar un reglamento para la prestación de servicios: la Ley Creadora del Ente Regulador, la Ley Creadora para la Planificación Sectorial y la Ley de Servicio y Reglamento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, respectivamente. Se implanta gradualmente un nuevo sistema de regulación de las tarifas y actualmente se realiza un estudio para determinar la viabilidad técnica,

económica, social y financiera de establecer empresas de ámbito regional, llamadas Empresas Regionales de Prestación de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, en vez de mantener una sola empresa que funcione a nivel nacional. Las empresas regionales se constituirán como sociedades públicas, cuyo principal accionista sería en un principio el Gobierno central. El sector privado podría participar mediante contratos de servicios, concesiones o aportando capital. El BID ha aprobado una subvención para financiar la terminación de la nueva estructura propuesta para el sector, que comprende la redacción final de leyes que rijan la prestación de servicios, así como de reglamentos habilitantes, acuerdos modelo sobre concesiones, etc.

b) Electricidad

Hasta 1994 el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) había sido el único organismo encargado de todos los aspectos de la política energética, así como de la generación, transmisión y distribución de electricidad. Siempre ha habido cierta autogeneración.

En 1993, el Gobierno de Nicaragua empezó a reestructurar el sector eléctrico a fin de aumentar la eficiencia y mejorar el suministro de energía eléctrica, así como atraer recursos privados al sector. El Gobierno, en virtud del decreto legislativo N° 46-94 del 1 de noviembre de 1994, reformó el INE creando la Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL), empresa verticalmente integrada que se encarga de generar, transmitir, distribuir y comercializar la energía eléctrica, quedando el INE con las funciones de planificación; formulación y aplicación de la política energética; regulación, control y fiscalización del sector energético; y la evaluación de los recursos energéticos. La ENEL inició operaciones en enero de 1995.

La Asamblea Nacional aprobó el 28 de octubre de 1997 la "Ley de la Industria Eléctrica", que tiene como propósito establecer el régimen legal para el desarrollo del sector eléctrico. Los aspectos principales de la ley son los siguientes: (i) libertad de las empresas para participar en las actividades de generación y distribución, mientras que la actividad de transmisión será desarrollada por una empresa estatal; (ii) integración vertical limitada a sistemas aislados y empresas de distribución con generación de hasta 10 MW; (iii) las redes de transmisión y distribución funcionarán en virtud de un régimen de libre acceso, con regulación de los cargos por el uso de las mismas; (iv) independencia del Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC) de cualquier empresa de generación o distribución; (v) régimen de precios libres y regulados, este último limitado a las transacciones entre distribuidores y consumidores finales, sistemas de peaje y despacho de carga; y (vi) existencia de un mercado eléctrico en el cual podrán participar generadores, distribuidores, grandes consumidores, etc., los que podrán efectuar transacciones ya sea por contratos a largo plazo y en el mercado para entrega inmediata ("spot"), y libertad de los grandes consumidores de comprar a cualquier generador o distribuidor.

Estadísticas del sector

Capacidad instalada neta en 1995 (en MW):

| | |
|-----------------------|-----|
| · térmica..... | 281 |
| · hidroeléctrica..... | 106 |
| · geotérmica..... | 70 |
| · TOTAL | 457 |

| | |
|--|----|
| Porcentaje de la población con instalaciones en su vivienda en 1989..... | 38 |
|--|----|

Se espera que la ENEL se dividirá en por lo menos dos empresas de generación, dos de distribución y una de transmisión. Una vez terminada la reestructuración, se procedería en un corto plazo a la privatización o capitalización de las empresas de generación y distribución resultantes, comenzando con las de distribución. La transmisión se mantendría en manos del estado.

Nicaragua tiene importantes recursos geotérmicos. El único campo geotérmico que se encuentra actualmente en la explotación es el Momotombo, que cuenta con una capacidad instalada de 70 MW. Los inversionistas privados han expresado interés en participar en su aprovechamiento. Ejemplo de ello es el proyecto El Hoyo-Monte Galán, que se habrá de ejecutar como empresa de propiedad y explotación privadas. La etapa de exploración empezó en 1996. En la segunda etapa, se prevé instalar una central de 50 MW que entraría en funcionamiento en 1999. En la etapa final, la central se ampliaría a 105 MW, estando prevista la entrada en servicio en 2001. En agosto de 1997, Unocal Corporation suscribió un contrato para exploración geotérmica con el INE.

12. Panamá

En la política económica del Gobierno de Panamá se hace mayor hincapié en las políticas sociales y las medidas encaminadas a promover la participación del sector privado en la infraestructura y otros sectores. Existe un importante programa de cesión de empresas de servicios de utilidad pública. Se prevé que el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), el monopolio estatal en el sector de la electricidad, y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), el servicio estatal de agua potable y saneamiento, se privaticen en un futuro próximo, y ambos sectores ya se han abierto a la participación privada.

El Ministerio de Planificación y Política Económica (MIPPE) asesora al Gobierno en política económica y social y presta asistencia en el proceso de reestructuración y privatización de las empresas públicas. La Unidad Coordinadora para el Proceso de Privatización (ProPrivat) del Ministerio de Hacienda y Tesoro se creó en virtud de la Ley N° 16, de 14 de julio de 1992, para facilitar el programa de privatización y supervisar la venta de los bienes gubernamentales.

En virtud de la Ley N° 26 de 29 de enero de 1996, se creó el Ente Regulador de los Servicios Públicos, un organismo autónomo del Estado, con personería jurídica y patrimonio propio, y con fondos separados e independientes del Gobierno Central, que tiene a su cargo el control y fiscalización de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, telecomunicaciones y electricidad. Se creó además la tasa de control, vigilancia y fiscalización de los servicios públicos, a favor del Ente Regulador. El monto de la tasa aplicable a cada servicio es fijado anualmente por el Ente Regulador, pero no puede exceder del 1% de los ingresos brutos de los sectores respectivos. Debe ser pagada por las empresas prestadoras de servicios públicos y no puede ser transferida a los usuarios a través de las tarifas.

a) Abastecimiento de agua potable y saneamiento

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) se encarga de todos los aspectos del abastecimiento de agua potable y el alcantarillado en las áreas urbanas. Las Juntas Administradoras de Acueductos Rurales (JAAR) se ocupan de la prestación del servicio a la población rural. Operan bajo la vigilancia e inspección del Ministerio de Salud (MINSA).

Cobertura estimada

La cobertura del abastecimiento de agua potable en las zonas urbanas es casi de un 100% y generalmente esa agua es de buena calidad. El nivel de cobertura es más bajo -aproximadamente el 66%- en las zonas rurales, donde algunos sistemas suministran agua de calidad dudosa. Las pérdidas de agua son cuantiosas y ascienden a un 46% en los sistemas urbanos. Aproximadamente el 84% de las viviendas tiene instalaciones de alcantarillado, fosas sépticas o letrinas. Virtualmente no se tratan las aguas servidas.

El sector ha sido reformado en virtud de la Ley N° 2 de 7 de enero de 1997 por el cual se dicta el marco regulatorio e institucional para la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado. Los objetivos principales de la ley son: (i) separar la función de definición de políticas y planificación del sector, de la función de regulación, fiscalización y control de los servicios, y de la función de prestación de los servicios; (ii) dotar al sector de una estructura

institucional transparente, eficaz y eficiente; (iii) fortalecer el proceso de formulación de normas; (iv) establecer los principios del régimen tarifario y de subsidios; (v) conciliar un eficaz y efectivo suministro de los servicios con la adecuada protección de la salud pública, el bienestar de la población, y la preservación del medio ambiente; (vi) proteger adecuadamente los derechos, obligaciones y atribuciones de los clientes, de los prestadores y del Estado; (vii) asegurar la operación apropiada y el mantenimiento adecuado de los sistemas existentes, y promover la expansión de los servicios; y (viii) promover la participación del sector privado en la prestación de los servicios.

El gobierno ha decidido privatizar el IDAAN y creó la Comisión de Incorporación de la Participación del Sector Privado para dirigir el proceso de privatización en el sector de agua potable y saneamiento. El IDAAN será privatizado como una toda unidad mediante una concesión por 30 años. La concesión se otorgará durante 1998. Precalificación está programada para junio/julio, licitación para agosto/septiembre y negociaciones para octubre/diciembre. Ya ha sido otorgado un contrato BOT para abastecer de agua en bloque a la Ciudad de Panamá.

b) Electricidad

Hasta el pasado reciente, el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), una empresa verticalmente integrada, se encargaba de la generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, y realizaba las funciones de planificación y regulación del servicio público de electricidad. Otros dos entes, la Comisión

del Canal de Panamá, con una capacidad instalada de 142 MW, y la Chiriquí Land Company, con 10 MW, completan la capacidad de generación en el país.

Estadísticas del sector

Capacidad instalada neta en 1995 (en MW):

| | |
|-----------------------|-----|
| · térmica..... | 406 |
| · hidroeléctrica..... | 551 |
| · TOTAL | 957 |

| | |
|--|----|
| Porcentaje de la población con instalaciones en su vivienda en 1989..... | 58 |
|--|----|

El Gobierno ha decidido realizar una reforma integral del sector eléctrico, orientada a incrementar la eficiencia y mejorar el nivel de servicio mediante la introducción de la competencia y el aumento de la participación privada. Como primera medida, se ha propuesto permitir a los inversionistas privados generar y vender electricidad construyendo nuevas plantas. En virtud de la Ley N° 6 del 9 de febrero de 1995, se puso fin al monopolio del IRHE y se permite a las empresas privadas generar energía eléctrica para su propio consumo o para venderla a al IRNE o a terceros. El IRHE ya ha suscrito un contrato de compra de electricidad con un generador privado por 50 MW de potencia y 5 años de duración (1997-2002).

En segundo lugar, en la Ley N° 6 del 3 de febrero de 1997, se dictó el marco regulatorio e institucional para la prestación de servicios públicos de electricidad. Los principios centrales del marco regulatorio e institucional contenido en la ley son los siguientes: se crea la Comisión de Política Energética adscrita al MIPPE, con la finalidad de formular las políticas globales y definir la estrategia del sector energético; las funciones de regulación se asignan al Ente Regulador; y los precios en las actividades monopólicas de transmisión y distribución están sujetas a regulación mediante fórmulas tarifarias que incentiven la eficiencia y remuneren adecuadamente el capital invertido, mientras que los precios de la

generación son determinados por la competencia. El servicio público de operación integrada será prestado por el Centro Nacional de Despacho, dependencia de la Empresa de Transmisión.

Se permite a las empresas de capital nacional o extranjero, privado o mixto, participar en el sector eléctrico mediante: compra de acciones de las empresas eléctricas del estado, concesiones para la construcción y explotación de plantas de generación hidroeléctrica y geotérmica y las actividades de transmisión y distribución para el servicio público, y licencias para la construcción y explotación de plantas de generación distintas a las sujetas a concesión. La ley introduce la separación de las actividades de generación, transmisión y distribución y establece restricciones para desarrollar en forma conjunta dichas actividades. Se establece un mercado libre donde grandes clientes y las empresas distribuidoras pueden comprar directamente a los generadores. El mercado se basa en el principio de libre acceso de las redes de transmisión y distribución.

La ley establece un período quinquenal de transición. Durante este período, se le asigna a la Empresa de Transmisión, de capital estatal, que también está encargada de las funciones de planificación de la expansión y de la operación integrada del sistema interconectado nacional, la función de comprador principal con la responsabilidad de efectuar la licitación para la compra de energía. A partir del sexto año la Empresa de Transmisión cesará en su función de comprador principal, y las empresas distribuidoras podrán comprar libremente en el mercado.

El Gobierno ha decidido privatizar el IRHE. El IRHE está siendo reestructurado en ocho empresas diferentes: una de transmisión, tres de distribución, una de generación termoeléctrica, y tres de generación hidroeléctrica. Las acciones de todas las empresas, salvo la empresa de transmisión, que será 100% de propiedad del Estado, podrán venderse a inversionistas nacionales o extranjeros. Se venderá al sector privado un bloque de 51% ó más de las acciones de las empresas de generación térmica y de distribución, y un bloque de hasta 49% de las acciones de las empresas de generación hidroeléctrica (en este caso, el contrato de compraventa de acciones será acompañado de otro contrato que asegure al comprador la administración de la empresa) que resulten de la reestructuración del IRHE. El Estado reservará el 10% del total de las acciones con el propósito de ofrecerlas en venta a los trabajadores. Las acciones remanentes podrán ser vendidos mediante los procedimientos de bolsa de valores o subasta pública, con un límite de 5% de estas acciones por comprador. La venta de las acciones de las empresas de distribución debería iniciarse en el tercer trimestre de 1998 y de las empresas de generación en el cuatro trimestre. Se prevé una segunda venta de acciones para 1999.

Panamá tiene fuentes geotérmicas de moderada magnitud y ha recibido una subvención del BID para realizar estudios de viabilidad de proyectos que habría de ejecutar el sector privado.

c) Transporte por vías navegables interiores

Se prevé que Panamá asuma la gestión del Canal de Panamá el 31 de diciembre de 1999. Hasta la fecha no se ha previsto privatizar las operaciones del Canal, pero podría haber oportunidades de concertar contratos para servicios por lo menos en relación con algunas operaciones cotidianas y funciones de mantenimiento.

Estadísticas del sector

Vías navegables interiores: el Canal de Panamá, con 82 km; y 800 km navegables para embarcaciones de poco calado.

13. Puerto Rico

El Gobierno de Puerto Rico privatiza actualmente las empresas de propiedad estatal en sectores competitivos y delega o subcontrata otras actividades al sector privado. El sector del abastecimiento de agua potable y el alcantarillado ya se ha abierto a la participación del sector privado y hay planes de privatizar la generación de electricidad. El Comité de Privatización de Puerto Rico (*Puerto Rico Privatization Task Force*) coordina la privatización y promueve la participación del sector privado en la prestación de los servicios actualmente a cargo de los organismos gubernamentales.

a) Abastecimiento de agua potable y saneamiento

El Gobierno ha decidido privatizar la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (*Puerto Rico Aqueduct and Sewer Authority*) (AAA). La AAA explota 220 sistemas de abastecimiento de agua y 71 sistemas de recogida y tratamiento de las aguas servidas en la isla.

Cobertura estimada

La cobertura del abastecimiento de agua potable y el saneamiento es universal en Puerto Rico. Las pérdidas de agua se estiman en un 37%. En últimos tres años hubo dos períodos de racionamiento.

Como primera medida, la AAA negoció contratos de explotación y mantenimiento de cuatro plantas de tratamiento de aguas servidas: Barceloneta, Bayamón, Carolina y Humacao. En segundo lugar, en septiembre de 1995 se negoció un contrato con la *Professional Services Group, Inc.*, filial estadounidense de la *Compagnie Générale d'Eaux* de Francia, para operar, mantener y administrar los sistemas de agua potable y alcantarillado de la AAA. Actualmente, el gobierno está renegociando los términos del contrato.

El proyecto de inversión más importante en la actualidad es el "Superacueducto de la costa septentrional", un acueducto de 80 kilómetros por el que se transportará agua del lago Dos Bocas a San Juan, la capital, y a varios municipios septentrionales. Se prevé satisfacer con este proyecto de unos 300 a 350 millones de dólares las necesidades de agua de la zona metropolitana de San Juan hasta el año 2050. En 1996, el Gobierno concedió un contrato a la empresa *Thames Dick* del Reino Unido para su construcción.

b) Electricidad

La Autoridad de Energía Eléctrica (*Puerto Rico Electric Power Authority*), empresa pública, se encarga de la generación, transmisión y distribución de electricidad. La mayor parte de la electricidad procede de centrales térmicas, aunque hay 21 pequeñas hidroeléctricas. Muchas empresas tienen sus propios grupos electrógenos de emergencia. El Gobierno estudia la posibilidad de privatizar la generación de electricidad. Se ha informado de que la Autoridad de Energía Eléctrica negocia contratos para comprar energía eléctrica a generadores del sector privado.

Estadísticas del sector

Capacidad instalada neta en 1995 (en MW)

| | |
|-----------------------|-------|
| · térmica | 4 490 |
| · hidroeléctrica..... | 85 |
| · TOTAL | 4 575 |

Porcentaje de la población con instalaciones en su vivienda en 1989..... s.i.

14. República Dominicana

El Gobierno de la República Dominicana está empeñado en reformar la economía, lo que incluye una mayor liberalización y la privatización de las empresas de propiedad estatal. En el caso de los servicios, han adoptado sobre todo la forma de acuerdos de explotación con empresas privadas. Existe un creciente consenso popular y político de que se requiere participación privada en las empresas estatales para mejorar la prestación de servicios públicos y poner fin a la sangría del presupuesto.

La Ley General de Electricidad y la Ley de la Reforma de la Empresa Pública se encuentran en discusión en el Congreso. En la primera se prevé la participación del sector privado en el sector eléctrico. La segunda tiene como objetivos principales redefinir la participación del estado en el ámbito productivo y hacer más eficientes las empresas públicas mediante la incorporación del sector privado. En la Ley se prevé la participación del sector privado en una de las siguientes modalidades: el modelo de capitalización aplicado en Bolivia; y, en los casos en que no sea recomendable utilizar el procedimiento de capitalización, otras modalidades como concesiones, venta de activos o de acciones, etc. Se crearía una comisión de alto nivel para administrar el proceso de reforma.

a) Abastecimiento de agua potable y saneamiento

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) administra los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado en las zonas urbanas y rurales, excepto en las dos ciudades más grandes, Santo Domingo y Santiago, donde funcionan otras dos empresas estatales de servicios públicos, a saber, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN). Al INAPA le incumbe la responsabilidad general en el sector.

Cobertura estimada

El 76% de la población, es decir, el 92% de la población urbana pero solamente el 58% de la población rural, tiene acceso al abastecimiento de agua potable. El nivel de calidad de los servicios es deficiente y se estima que el agua no contabilizada supera un 50%. Solamente el 20% de la población tiene instalaciones de alcantarillado, el 40% utiliza fosas sépticas y letrinas, mientras que el 40% restante no tiene medios adecuados de eliminar higiénicamente los excrementos.

La Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) y la Oficina Coordinadora y Fiscalizadora de Obras del Estado ejecutan programas de abastecimiento de agua potable y saneamiento para pequeñas comunidades rurales.

El programa del Gobierno para el período 1996-2000 abarca una estrategia de modernización del sector del abastecimiento de agua potable y el saneamiento, con la que se propone alentar la participación privada en el sector mediante lo siguiente: (i) asegurando que los usuarios paguen por los servicios que reciben; (ii) transformando los organismos del sector en empresas públicas sujetas a la misma legislación que las empresas de propiedad privada; (iii) abriendo el sector a la participación privada mediante contratos de servicios, de gestión y de arrendamiento en los sistemas existentes y mediante concesiones generales y parciales para nuevos sistemas; (iv) estableciendo un marco regulatorio adecuado que

reglamenta los monopolios naturales y protege los derechos del consumidor; y (v) velando por que las empresas que actúan en el sector logren una tasa de rendimiento razonable de su capital.

b) Electricidad

El Directorio de Desarrollo y Reglamentación de la Industria de la Energía Eléctrica (DDRIE) se encarga de facilitar la participación del sector privado en la industria de la electricidad; cumple también funciones regulatorias.

La Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), empresa autónoma de servicios públicos establecida en virtud de la Ley N° 4115, de 21 de abril de 1955, que es de propiedad estatal y está integrada de manera vertical, se encarga de la generación, transmisión y distribución de electricidad en la red pública. El sector privado tiene aproximadamente una tercera parte del total de la capacidad instalada de generación en el país. La CDE puede hacer frente a las insuficiencias comprando energía eléctrica disponible de instalaciones privadas de generación y ya ha concertado acuerdos de abastecimiento de energía eléctrica con varias empresas.

El Gobierno ha anunciado que se propone promover la participación del sector privado en la CDE. La Ley General de Electricidad, que actualmente se encuentra en discusión en el Congreso, está destinado a reestructurar el sector de la energía, a fin de brindar un marco regulatorio y una base para la participación privada. La CDE se dividiría en 8 empresas: dos termoeléctricas, una hidroeléctrica, tres de distribución, una de transmisión y una de soporte, que se encargaría, entre otras cosas, de contratos con productores independientes de energía eléctrica. El Gobierno tiene previsto vender aproximadamente el 50% de los activos de empresas de generación térmica y de distribución al sector privado, hasta el 10% a los empleados, y el resto quedaría en poder del Banco de Reservas, banco comercial del Gobierno, como un fondo de patrimonio. La CDE sería la propietaria de los activos hidroeléctricos, pero la administración de estos podría entregarse al sector privado; de la empresa de transmisión; y de la empresa de soporte. Adicionalmente, la reforma incluye la creación de dos nuevos organismos regulatorios: la Superintendencia de Electricidad (SIE) y el Organismo Coordinador de la Operación del Sistema.

c) Riego y drenaje

El Gobierno implanta un programa para que los distritos de riego alcancen la autosuficiencia financiera y para traspasar a los usuarios las competencias de explotación y mantenimiento.

Estadísticas del sector

Superficie agrícola en 1995 (en 1 000 hectáreas):

| | |
|-----------------------------|-------|
| · tierras cultivables | 1 349 |
| · tierras de regadío | 259 |

En virtud del Proyecto Manejo de Agua a Nivel de Finca (PROMAF), iniciado para facilitar el proceso de traspaso, se han ejecutado varios proyectos experimentales de

gestión por los propios agricultores. Han tenido tanto éxito que el Gobierno ha decidido entregar todos los sistemas de riego a los agricultores, para que los administren.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha aprobado un préstamo de 52 millones de dólares EE.UU. para apoyar el traspaso. Con el programa, que habrá de ejecutar el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), creado en 1965 en virtud de la Ley N° 6, se financiará también la modernización del equipo y la infraestructura. Se destinará a unos 40 sistemas de riego, que abarcan 80.000 hectáreas, y beneficiará a 20.000 productores.

15. Trinidad y Tabago

En la segunda mitad del decenio de 1980, el Gobierno de Trinidad y Tabago inició un programa de ajuste económico, cuyo objetivo es transformar la economía del país, que depende del petróleo y está dominada por el sector público, en una economía más diversificada, orientada hacia el mercado e impulsada por el sector privado. En la última década, se ha privatizado la mayoría de las empresas públicas. Los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado se han abierto recientemente a la participación del sector privado y la generación de electricidad se ha privatizado parcialmente.

La *Public Utilities Commission* (PUC) se encarga de la regulación en los sectores de agua potable, electricidad y telecomunicaciones. Es una entidad autónoma. Regula los precios y la calidad de los servicios

a) Abastecimiento de agua potable y saneamiento

La *Water and Sewerage Authority* (WASA) se encarga del desarrollo y el control de las instalaciones de abastecimiento de agua potable y alcantarillado en el país. Administra todos los asuntos relacionados con el agua, el alcantarillado y el saneamiento en general. Las empresas petroleras producen agua para satisfacer sus propias necesidades, tanto industriales como para consumo humano.

Cobertura estimada

El nivel de cobertura de los servicios es alto, aproximadamente el 92% de la población tiene acceso al abastecimiento de agua potable mediante instalaciones en sus viviendas, grifos en los patios o fuentes públicas. Sin embargo, la confiabilidad del servicio ha sido desigual y el abastecimiento es insuficiente. El agua no contabilizada asciende al 50%. Los sistemas de alcantarillado benefician solamente a un 30% de los habitantes en su mayor parte en las zonas urbanas, mientras que el resto de la población urbana y la mayor parte de la población rural utiliza fosas sépticas o letrinas de pozo.

La estrategia gubernamental en el sector de agua potable y alcantarillado consiste en la transferencia de la responsabilidad de la provisión de los servicios a una empresa privada. El traspaso se hará en dos etapas, el primero de los cuales - éste contempla la contratación de una empresa para la gestión provisional del servicio - ya ha sido implementado. En la segunda etapa, se otorgará una concesión para la gestión, financiación y ejecución de un programa de inversiones a largo plazo. La empresa de la primera etapa tendría preferencia al elegir al concesionario.

El Gobierno ha negociado un contrato de tres años con un consorcio que integran *Severn Trent Water International* y *Tarmac Ltd.* La WASA y el consorcio han establecido una nueva empresa mixta, *Trinidad and Tobago Water Services* (TTWS). El contrato entro en vigor en abril de 1996.

El contrato tiene muchas características de un contrato de gestión tradicional. En virtud del contrato, TTWS debe cumplir requisitos de rendimiento muy concretos. El monto de compensación alcanza unos 10 millones de dólares, pero el gobierno puede retener de hasta un 61% de la compensación por el incumplimiento. Se espera que la empresa alcance la viabilidad financiera en un plazo de tres años. Para facilitar la transición, se ha obtenido un préstamo de *Citicorp Merchant Bank*, un filial local de *Citibank*, de 83 millones de dólares.

Además, con el contrato se hizo posible acceso a un préstamo del Banco Mundial para financiar un programa de inversiones.

b) Electricidad

Hasta 1994, la *Trinidad and Tobago Electricity Commission* (T&TEC) de propiedad gubernamental, se había encargado de la generación, transmisión y distribución de electricidad en el país. Ese año, el Gobierno reestructuró la T&TEC y le retiró la responsabilidad de generar electricidad para establecer una

nueva empresa mixta, la *Power Generation Company of Trinidad and Tobago* (PowerGen). La *PowerGen* asumió la responsabilidad de la generación de electricidad, mientras que la T&TEC se siguió encargando de la transmisión y distribución de electricidad a nivel nacional.

Estadísticas del sector

Capacidad instalada neta en 1995 (en MW):

| | |
|-----------------|-------|
| · térmica | 1 150 |
| · TOTAL | 1 150 |

| | |
|---|----|
| Porcentaje de la población con instalaciones en su vivienda en 1989 | 97 |
|---|----|

El capital privado participa en la *PowerGen*. La T&TEC, con el 51%, es el principal accionista y el 49% restante pertenece a dos empresas de los Estados Unidos, la *Southern Electric International Inc.* (SEI), con un 39%, y la *Amoco Business Development Corporation*, con un 10%. Ambas empresas pagaron a la T&TEC 71,6 millones de dólares por el 49% de las acciones y convinieron en invertir hasta 35,9 millones de dólares, en total, en la nueva planta y en equipo y servicios nuevos.

Hasta ahora, la T&TEC ha tenido un monopolio virtual sobre la generación de electricidad. Recientemente se ha anunciado que las actividades de generación serían abiertas a la participación del sector privado. Actualmente el Gobierno está formulando una política sobre cuanta participación privada adicional se permitirá en el sector de generación.

16. Otros países del Caribe

La participación del sector privado en los servicios públicos relacionados con el agua aún es incipiente en la mayoría de los demás países del Caribe. Las razones de ello son diversas. Por ejemplo, en un estudio reciente financiado por el BID en las Bahamas, se llegó a la conclusión de que los arreglos de concesión o privatización total con respecto al abastecimiento de agua potable y el saneamiento no parecían posibles a corto plazo debido a la falta de legislación y de un marco regulatorio apropiados, a las actitudes imperantes entre el público y a antecedentes de rendimiento financiero poco sólidos que hacían difícil que las empresas privadas experimentadas se quisieran comprometer. En el estudio se recomendó una serie de medidas para establecer un marco regulatorio adecuado, mejorar el rendimiento financiero del organismo interesado y aumentar la participación del sector privado a niveles que guardaran relación con la capacidad reguladora. La situación es similar en Santa Lucía, donde un grupo de consultores estudió recientemente el caso de la *Water and Sewerage Authority* (WASA). Una de las opciones que los consultores debían examinar era la de la privatización. En su informe provisional, no optaron por la privatización, pero sí señalaron que faltaba por completo un marco regulatorio que facilitara el proceso.

a) Abastecimiento de agua potable y saneamiento

La participación del sector privado en los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento se limita en gran parte a la construcción, explotación y mantenimiento de las instalaciones de desalinización del agua, generalmente en virtud de arreglos de BOT o enfoques similares. Entre los ejemplos al respecto figuran los de la *Ocean Conversion Limited* (BVI) en las Islas Vírgenes Británicas y la *Ocean Conversion Cayman Limited*, así como la *Aqua Design Limited*, en las Islas Caimán. En Bahamas, en 1996, *Waterfields Co. Ltd.*, empresa conjunta formada por Bacardi & Co. Ltd. y DesalCo, ganó una concesión de 15 años para construir una planta de desalinización del agua en virtud de arreglo de "construcción, propiedad y explotación" (BOO). Venderá toda su producción a la Water and Sewerage Corporation, empresa estatal encargada de los servicios de agua potable y alcantarillado en la isla.

Los principales hoteles y complejos turísticos explotan muchas pequeñas instalaciones de desalinización del agua y tratamiento y reciclado de las aguas servidas.

b) Electricidad

Aunque la participación del sector privado en la industria de la electricidad también es incipiente, se pueden encontrar algunos ejemplos de ello. En Anguila, la *Anguilla Electricity Company* (ANGLEC), que es de propiedad privada, se encarga de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. En Barbados, el 78% de las acciones ordinarias de la *Barbados Light and Power Company* (BL&P) está en manos de inversionistas privados, mientras que el 22% lo tiene el Gobierno a través de la National Insurance Board. En Santa Lucía, la *St. Lucia Electricity Services Ltd.* (LUCELEC) es una sociedad de economía mixta

controlada en un 43% por la empresa inglesa U.K. Commonwealth Development Corporation (CDC), 18,7% por la Alcaldía de Castries, 12,4% por el Gobierno, 12% por El Seguro Social y los restantes por privados. En las Bahamas, la *Bahamas Electricity Company* (BEC), la empresa nacional de servicios públicos, que es de propiedad estatal, se privatizará total o parcialmente, según se prevé, y ya hay empresas privadas que funcionan en Gran Bahama y varias islas más.